

HILDEBRANDT

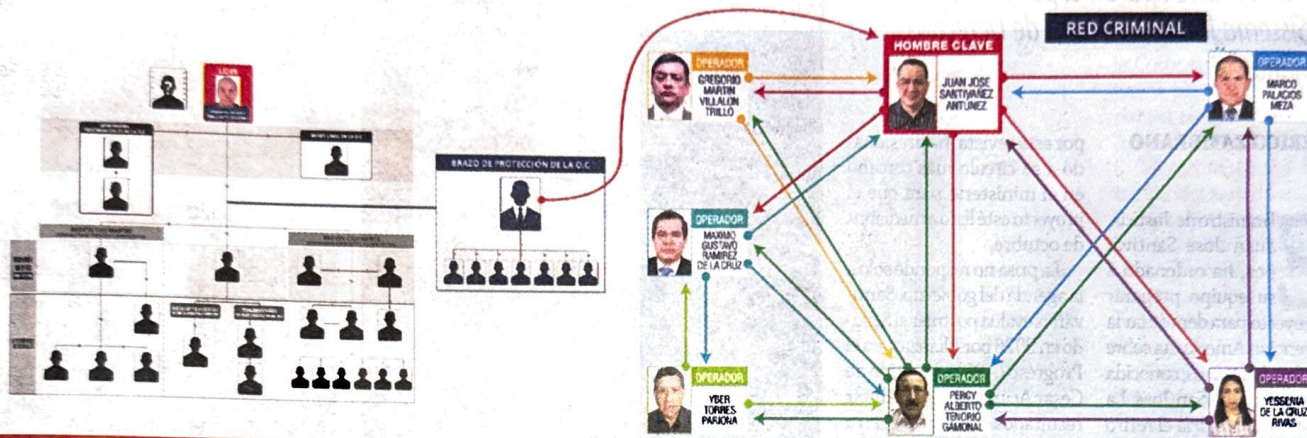
en sus trece



MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DEL PERÚ

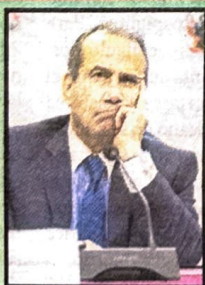
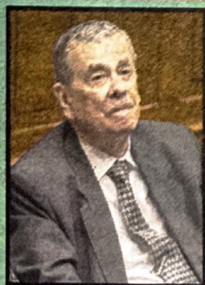
EQUIPO ESPECIAL DE FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DEL PODER
EQUIPO 5

GÉNESIS DE LA RED CRIMINAL



La red criminal que dirigen los Boluarte!

► Fiscalía sindicada a Juan José Santiváñez como hombre clave de la banda (4 y 5)



Soberanos mafiosos

(2 y 3)

El TC-Lavadora

Revistas.PeruRadio.net.pe (6 y 7)



Lima salvaje

(26 y 27)

Soberanos mafiosos

► **Mientras Fernando Rospigliosi alista la amnistía para los 154 militares y policías acusados de participar en la matanza de los años 2022 y 2023, el canciller Elmer Schialer y Dina Boluarte apuran el paso para librarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos**

AMÉRICO ZAMBRANO

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ha ordenado a su equipo preparar un proyecto para denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José. La iniciativa supondría el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, según indicaron fuentes del gabinete ministerial.

En paralelo, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi impulsa una nueva ley de amnistía destinada a favorecer a los policías y militares investigados por el medio centenar de muertes ocurridas durante las protestas que marcaron el inicio del gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Son dos caminos distintos con un mismo objetivo: garantizar la impunidad y blindar a las fuerzas del orden antes de que el Ministerio Público acuse a un grupo de 27 miembros del Ejército por la masacre de Ayacucho, proceso previsto para fines de año.

"Si eso ocurre, el Estado peruano tendrá el camino libre hacia una dictadura. Nadie podrá poner un límite a los abusos del poder", advirtió a este semanario el abogado Alexander Antialón Conde.

Santiváñez, señalado por la Fiscalía como el "hombre clave" de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno, es hoy el rostro operativo del plan.

Según fuentes consultadas

por esta revista, ha presionado a su círculo más cercano en el ministerio para que el proyecto esté listo a mediados de octubre.

La prisa no responde solo a la agenda del gobierno. Santiváñez evalúa postular al Senado en 2026 por Alianza para el Progreso (APP), el partido de César Acuña, y busca exhibir resultados que lo acerquen a un electorado conservador. El cronograma electoral fija diciembre como fecha límite para la inscripción de las listas de candidatos.

Para dar forma institucional al proyecto, el gobierno creó la semana pasada un "grupo de trabajo multisectorial" con el encargo de elaborar la llamada Ley de Soberanía Nacional. El decreto que lo sustenta lo colocó bajo la conducción del Ministerio de Defensa, aunque en la práctica es el titular de Justicia quien maneja el proceso.

El rótulo de "multisectorial" es engañoso: la comisión está integrada en su mayoría por mandos militares. Seis delegados de las Fuerzas Armadas frente a unos pocos funcionarios civiles. No es un detalle menor: el gobierno ha confiado a los uniformados el diseño de una ley que podría servir de antesala para apartar al país del sistema interamericano de derechos humanos.

"Las Fuerzas Armadas no pueden revisar tratados de derechos humanos y no son deliberantes", recordó el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El mismo libreto se repite en el frente diplomático.

El Ejecutivo ha creado otra comisión, esta vez integrada por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para evaluar el retiro del Perú del sistema interamericano. Pero el propio canciller Elmer Schialer ya adelantó en una entrevista con Latina que "este sistema ya no responde a la realidad del Perú".

Las dos comisiones, según especialistas consultados para este informe, parecen creadas más para la forma que para el

que acatar lo dispuesto por quien funge de jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional", añade el abogado Alexander Antialón.

Como parte de la misma estrategia, el gobierno planea instalar mesas ciudadanas abiertas y encargar encuestas de opinión para sostener, al final del proceso, que la población respalda el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según dos fuentes de Palacio. El

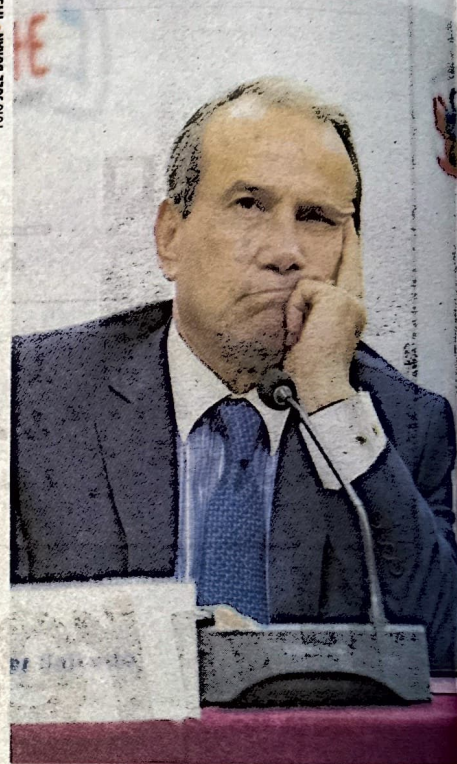
apunta el internacionalista Oscar Vidarte.

Rospigliosi, quien es el primer vicepresidente del Congreso, ha confirmado que el Parlamento trabaja en una nueva ley para beneficiar a los policías y militares investigados por las muertes ocurridas durante las protestas contra Dina Boluarte.

"El siguiente paso que tenemos que dar es liberar a quienes impidieron que las turbas repusieran en el go-



Fernando Rospigliosi: cada día más fujimorista y ventral.



"El Perú estaría mejor si la Corte IDH y la CIDH tuvieran una visión más objetiva", declaró el canciller Elmer Schialer, anticipando lo que vendrá.

fondo. No buscan un debate jurídico o diplomático sino dar al Ejecutivo la coartada de que el retiro del sistema interamericano fue revisado en instancias técnicas. La decisión, en realidad, ya está tomada.

"Lo que buscan es darle legitimidad a una decisión que será muy cuestionada", afirma el internacionalista y catedrático Oscar Vidarte. "Los militares han construido una narrativa anti-Corte Interamericana de Derechos Humanos por razones que ya conocemos. Lo que me preocupa es que el sector diplomático pueda aceptar una cuestión tan desfavorable para nuestros intereses", señala.

"Estas comisiones están conformadas principalmente por representantes de instituciones militares y tienen

propósito es fabricar una legitimidad pública que complemente la coartada técnica de las comisiones de militares y diplomáticos.

El cronograma del Ejecutivo busca coincidir con la presentación de una nueva ley de amnistía que prepara el parlamentario naranja Fernando Rospigliosi. Para especialistas consultados, esa sincronía sugiere que el plan de apartarse del sistema interamericano no se limita a la voluntad de Dina Boluarte sino que busca blindar de manera más amplia a las Fuerzas Armadas y al bloque político que respalda al gobierno.

"Lo que se busca es satisfacer demandas de algunos sectores castrenses que son los que en este momento resultan fundamentales para el sostenimiento del régimen",

bierno a Pedro Castillo en diciembre de 2022 y principios de 2023. Hay más de 350 militares y policías procesados por esos casos", declaró Rospigliosi a Canal N.

A los primeros que busca blindar la iniciativa es a los militares investigados por la masacre de Ayacucho, ocurrida el 15 de diciembre de 2022, cuando diez civiles fueron asesinados durante la represión del Ejército.

Esta semana se iniciaron las diligencias de reconstrucción de los hechos, con los agraviados, sus familiares y testigos de las muertes y lesiones durante las manifestaciones. Intervinieron peritos de la Fiscalía y del Ejército.

El plazo de la investigación preparatoria contra 36 investigados, en su mayoría militares, culmina a fines de este



FOTO: JESÚS ZAMALLOA - W13

Presidenta Dina Boluarte, denunciada constitucionalmente por homicidio y lesiones graves, prepara lo que ella cree que será un escape perfecto.

mes. Debido a la complejidad del proceso por la cantidad de imputados y agraviados, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial una ampliación de tres meses más. Es decir, hasta fin de año. Luego deberá decidir si presenta acusación o archiva el caso.

Hasta ahora, la Fiscalía ha formalizado investigación contra 27 integrantes del Ejército vinculados al control de las manifestaciones registradas el 15 y 16 de diciembre en las inmediaciones del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte, en Huamanga.

Entre ellos figuran el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería, general Jesús Vera Ipenza, el coronel Carlos Vega Pérez, el teniente coronel Jimmy Álex Vengoa Bellota y el entonces jefe de la Macrorregión Policial de Ayacucho, general Ántero Mejía Escadajillo.

Según información recogida por esta revista, la Fiscalía de Ayacucho alista una acusación por homicidio calificado y lesiones graves contra los responsables.

La eventual ley de amnistía tendría un efecto inmediato: podría limpiar a los militares

procesados por la masacre de Ayacucho y por otras muertes en las protestas. Todo dependerá, sin embargo, de la independencia judicial. No es un antecedente menor que algunos jueces hayan decidido no aplicar la Ley N° 32107, promulgada por el Congreso para declarar prescritos los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2022. Esa misma resistencia podría repetirse ahora.

"Esa nueva ley de amnistía va a salir sin duda alguna. Y será pronto", adelanta el abogado Carlos Rivera, del IDL. A su juicio, el Ejecutivo la res-

paldará porque ya ha perdido "toda la vergüenza".

Una muestra ocurrió en agosto, cuando Boluarte promulgó una primera ley de amnistía para los militares y policías acusados, procesados o incluso sentenciados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000.

La ley extingue la responsabilidad penal de los uniformados procesados por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, secuestros, torturas y violaciones sexuales. También concede amnistía a condenados mayores de 70 años.

En la ceremonia de promulgación, en Palacio, estuvo presente Juan Rivera Lazo, uno de los jefes del Grupo Colina y sentenciado a 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos.

En una fotografía se le ve tomado de las manos con Dina Boluarte: un condenado por violaciones a los derechos humanos junto a una mandataria denunciada constitucionalmente por homicidio calificado. El retrato de la impunidad.

Aun si el gobierno concreta este año la denuncia del Pacto de San José, el trámite puede demorar más de un año y medio. Durante ese tiempo, la Corte seguirá con competencia para revisar casos recientes, como las masacres en Ayacucho y Juliaca.

"El procedimiento de denuncia del tratado es largo. Implica una comunicación formal de la presidenta a la Corte IDH y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA)", explica el abogado Carlos Rivera.

"Todo ese trámite tiene un punto de culminación largo. Y hasta que no se concrete, los hechos ocurridos en el país siguen siendo competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana", añade.

Venezuela es un ejemplo. En septiembre de 2012 denunció formalmente la Convención Americana, pero la Corte IDH sostuvo que el tratado seguía vigente en ese país y continuó celebrando audiencias sobre casos del Estado venezolano.

Según especialistas consultados, todo esto indica que una eventual salida de la Corte no beneficiaría directamente a Dina Boluarte, cuyo mandato concluye en 2026, sino a los sectores que la sostienen políticamente: el fujimorismo y la derecha.

"Desde el nombre, ley de soberanía, se está apuntando a la Corte Interamericana. Y eso es un serio error, porque la Corte no violenta la soberanía", subraya Óscar Vidarte.

"El Estado, soberanamente, se ha obligado a cumplir con una serie de disposiciones del sistema interamericano. Hablar de soberanía es un error. Lo que en realidad se busca es satisfacer demandas de algunos sectores castrenses que tienen una lectura parcializada y equivocada", afirma. ■

Chicharrón de Santiváñez

► Documentos del Ministerio Público sindican al actual ministro de Justicia como hombre clave de una organización criminal encabezada por los hermanos Boluarte (Dina y Nicanor). El wayki habría utilizado a la PNP para ejecutar desalojos, favorecido a abogados de su entorno y cobrado cupos a oficiales a cambio de no pasarlos al retiro



Juan José Santiváñez: la carpeta del caso "Ícaro", la que más lo compromete, tiene tres testigos protegidos y miles de chats. Sus allegados usaban el apelativo de "Cachetón" para referirse a él.

ELOY MARCHÁN

En documentos fiscales obtenidos por esta publicación Dina Boluarte aparece a la cabeza de una organización criminal en la que Santiváñez es el "hombre clave". La investigación del caso "Operación Ícaro", pese a las embestidas de los "sospechosos", continúa viento en popa.

La hipótesis de trabajo del equipo de investigadores que está hurgando en las entrañas de Palacio de Gobierno apunta directamente a los hermanos Boluarte. Según la línea de trabajo del fiscal Carlos Ordaya López, jefe del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Santiváñez "se puso al servicio" de la presidenta a cambio de "un puesto clave en el Ejecutivo" que le permita tener "ganan-

MINISTERIO PÚBLICO
"Acta de la investigación y sistematización de la evidencia probatoria"

Sección General de Fines contra la Corrupción del Poder
Fiscalía Provincial - Lima

unido con los presuntos operadores Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessera de la Cruz Rivas, Gregorio Martín Villalón Trillo, Maximiliano Castro Ramírez de la Cruz y Yver Torres Pareda, para planificar de manera concertada y distribuyendo roles, la concreción de proyectos delictivos de corrupción de funcionarios en el marco de su propia presunta red criminal, nacida en su momento en el Ministerio del Interior, cuyo propósito habría sido obtener beneficios económicos ilícitos instrumentalizando y pervertiendo las competencias funcionariales provenientes del puesto clave que ocupaba Juan José Santiváñez Antúnez.

A partir de lo antes descrito, la presunta organización criminal (red criminal) del "hombre clave" Juan José Santiváñez Antúnez ha venido desplegando diversos hechos presuntamente delictivos perpetrados de forma organizada como parte de su programa criminal, conforme se detalla:

HECHO 1:	PRESUNTO FAVORECIMIENTO ILÍCITO EN LA ADJUDICACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DENTRO DE LA DEPENDENCIA DEL PODER DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
HECHO 2:	PRESUNTO CORROO ENDURIDO A CAMBIO DE LA PERMANENCIA DE GENERAL
HECHO 3:	PRESUNTO FAVORECIMIENTO ILÍCITO EN BENEFICIO DE LA MINA EL DERECHO A CAMBIO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y/O LABORAL
HECHO 4:	PRESUNTA ACCIÓN DE ENLUBRIMIENTO REAL EN FAVOR DEL HOMBRE CLAVE DE LA RED CRIMINAL

5. ELEMENTO TELEOLÓGICO: BENEFICIO ECONÓMICO

La presunta organización criminal de tipo red criminal, que tiene como "hombre clave" a Juan José Santiváñez Antúnez, y a los presuntos operadores Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessera de la Cruz Rivas, Gregorio Martín Villalón Trillo, Maximiliano Castro Ramírez de la Cruz y Yver Torres Pareda, habrían desplegado presuntas conductas ilícitas vertidas en delitos de corrupción de funcionarios, instrumentando siempre, cobrando pasivo propio, cobrando pasivo impropio y accediendo real con agravante específica con la finalidad de obtener beneficios económicos ilícitos, instrumentalizando y pervertiendo las competencias funcionariales provenientes del puesto clave que ocupaba Juan José Santiváñez Antúnez.

6. ELEMENTO LEGISLACIONAL

Como elemento funcional, se interpreta una estructura funcional o conjunto de actividades o tareas determinadas y ordenadas para lograr los objetivos de la presunta organización criminal, por tanto y conforme se ha demostrado a lo largo del presente análisis y la descripción de los hechos perpetrados por la organización criminal, existe una estructura en la que se sostiene el dicho accionar de esta

MINISTERIO PÚBLICO
"Acta de la investigación y sistematización de la evidencia probatoria"

Sección General de Fines contra la Corrupción del Poder
Fiscalía Provincial - Lima

presenta organización criminal, investigaciones que han logrado determinar que los roles y funciones de esta son flexibles, pues puede tener una más de una función dentro de la red criminal, manteniéndose su evolución con manifestación en los hechos y desahucios. Asimismo, se postula que las personas materia de investigación habrían cumplido las siguientes funciones:

a) Juan José Santiváñez Antúnez, identificado con DNI n.º 21227232, en su condición de integrante de la presunta red criminal (tipología 5), desde el 18 de mayo de 2024, cumplió el rol de HOMBRE CLAVE, quien en su calidad de abogado, luego de ser designado como Asesorado del Interior, habría iniciado presuntas actividades delictivas de corrupción de funcionarios dentro de dicho estamento estatal, valiéndose de su puesto clave dentro de uno de los sectores de poder como es el Poder Ejecutivo y de la confianza de la mandataria presidencial, Dina Boluarte Zegarra, para que, con la distribución de roles de los presuntos operadores de la presunta red criminal, Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza y Yessera de la Cruz Rivas (por abogados) obtengan beneficios económicos ilícitos producto de la concreción de los presuntos proyectos criminales, instrumentalizando y pervertiendo con ello, las competencias funcionariales provenientes de su cargo público ostentado por el referido "hombre clave", defraudando los deberes jurídicos como el correcto funcionamiento de la Administración Pública, probidad y transparencia dentro de la función pública.

b) Percy Alberto Tenorio Gamonal, identificado con DNI n.º 21521393, en su condición de integrante de la presunta red criminal (tipología 5), desde el 18 de mayo de 2024, cumplió el rol de OPERADOR, quien, estando "por intermedio del hombre presunto operador Marco Antonio Palacios Meza" en permanente coordinación y acuerdo del "hombre clave", habría puesto a disposición su profesión como abogado y las instalaciones de su estudio jurídico "Tenorio" para efectuar presuntas directrices delictivas en la etapa preparatoria de conflictos con público dentro de entidades públicas del Poder Ejecutivo, y coadyuvar con los demás presuntos operadores en el ocultamiento de bienes de pertenencia del "hombre clave" para evitar que se obtengan evidencias que puedan apartarlo del cargo funcional, lo que impediría la continuación de la concreción de los presuntos proyectos criminales. Asimismo, su rol consistió en gestionar acuerdos presuntamente ilícitos con empresarios y personal policial (p. generales) para favorecerlos indebidamente con la intervención y coordinación del "hombre clave", a cambio de obtener beneficios económicos ilícitos en favor de la presunta red criminal, así como beneficios de orden material en favor del rol de "hombre de protección" de Juan José Santiváñez Antúnez en la presunta organización criminal liderada por el hermano de la Presidenta, Dina Boluarte Zegarra, lo que abarcaría a que el "hombre clave" continúe en el poder.

c) Marco Antonio Palacios Meza, identificado con DNI n.º 02741998, en su condición de integrante de la presunta red criminal (tipología 5), desde el 18 de mayo de 2024, cumplió el rol de OPERADOR, quien, habiendo actuado de intermediario entre Juan José Santiváñez Antúnez y los demás presuntos

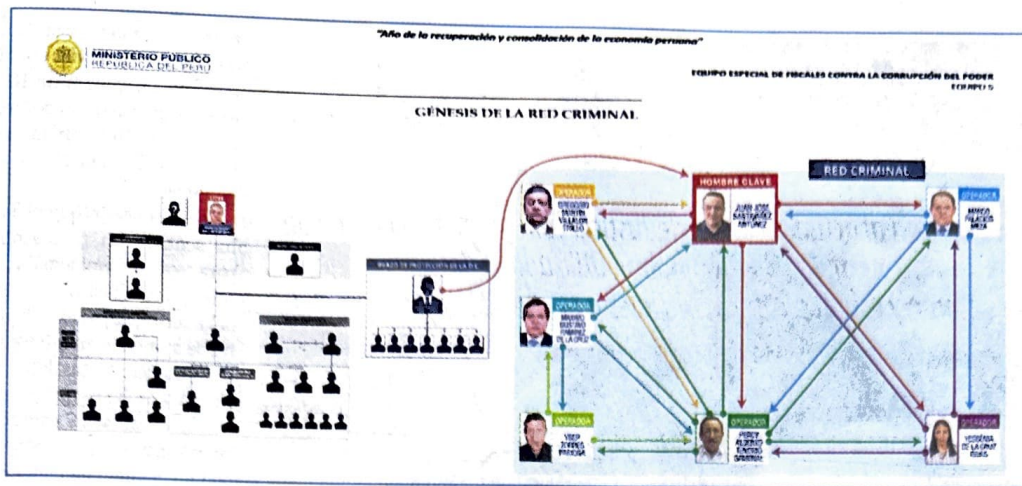
cias de procedencia ilícita".

Y en esa presunción fiscal, sostiene el fiscal Ordaya que Santiváñez habría utilizado a la Policía para ejecutar desalojos a pedido de empresarios, desfalcado al Ministerio del Interior con órdenes de servicio a favor de abogados y cobrado cupos a oficiales a cambio de no pasarlos al retiro.

En el organigrama elaborado por el Eficcop Santiváñez aparece como el jefe del "brazo legal" de la organización criminal y tiene a su cargo a policías, abogados y operadores. La banda, según la tesis fiscal, tiene brazos operativos en varias regiones del país, entre ellas Cajamarca, San Martín y varias provincias de Lima.

En la cabeza del organigrama aparece Nicanor Boluarte y a su costado un recuadro en blanco. No es un NN sino el espacio que debería ocupar su hermana. Su rostro no está

Páginas 20 y 21 del informe del Eficcop sobre el "Operativo Ícaro" especificando que Santiváñez es el "hombre clave" en la organización criminal de los hermanos Boluarte, quienes buscan impunidad en sus casos penales.



Organigrama hecho por el Eficcop del "Operativo Icaro". En el esquema Santiváñez aparece como el "brazo legal" de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte y su hermana.



Nicanor Boluarte: según el Ministerio Público, usó el partido como centro de operaciones.

el tiempo en que Santiváñez fue Ministro del Interior. La adquisición estaba estipulada en S/ 61.5 millones y terminó costando S/ 89.8 millones. Los fusiles israelíes modelo Arad 5, comprados a la FAME del Ejército, continúan guardados en los depósitos. No tienen munición.

En la trama de este contrato para proveer a la Policía de fusiles sin balas aparece Nicanor Boluarte.

La pista que sigue la Fiscalía es una reunión en un café. El 21 de febrero pasado, día cercano a la firma del contrato de los fusiles, un conocido operador de Nicanor Boluarte se reunió en una cafetería de Miraflores con el gerente comercial de FAME, Paulo Zevallos Rivarola, y hablaron animadamente de los exitosos "contratos con la Policía". En la cita también estaba el empresario de armas Diego Alfaro Di Natale. El encuentro quedó registrado por una cámara "indiscreta" y lo retransmitió el dominical "Cuarto Poder".

El operador Jorge Garboza Amand es el presidente de la ONG, "Manos que ayudan de

corazón", desde cuya oficina Boluarte despachaba. Garboza también está investigado en el caso "Los waykis en la sombra".

Juan José Santiváñez tiene hasta ahora doce carpetas fiscales. Los delitos por los que es investigado son de los más variados: negociación incompatible, encubrimiento, malversación de fondos, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad.

El expediente 12-2024, abierto en mayo del 2024 y que dio lugar al "Operativo Icaro", es el más importante para el Eficcop. Se trata de la investigación que le pisa los talones a la (presunta) red criminal enquistada en Palacio de Gobierno.

La carpeta cuenta con el aporte de tres testigos protegidos. El informante de código 003-2025 pertenece al círculo más íntimo de Santiváñez. Fue quien puso en la mira al coronel en retiro Percy Tenorio Gamonal como el operador de todos los negocios sucios del ministro de Justicia. El testigo ha entregado su celular y se han rescatado conversaciones que mantuvo con Tenorio.

En los chats Tenorio coordina las contrataciones de abogados para policías y altos funcionarios con plata del Ministerio del Interior y el cobro de cupos a generales a cambio de no pasarlos al retiro. Las conversaciones son entre julio del 2024 y enero del 2025, cuando Santiváñez era el mandamás de Interior. "Cachetón" es el apelativo que Tenorio usa en sus chats para referirse a Santiváñez.

El testigo protegido 003-2025 también ha denunciado que los dos policías asignados a su cuidado -Jesús Guerrero Rodríguez y Jhoon Olano

Tito- le lanzaron amenazas veladas para que cambie su versión o no vaya a declarar. Según el informante, los policías que debían velar por su vida reportaban a "Arriola" y "Canario". Los aludidos son los generales Oscar Arriola y Víctor Zañabrisa, los números 2 y 1 de la Policía, respectivamente.

Hay una denuncia policial contra Santiváñez hasta hoy desconocida. Se remonta al 2014, cuando el brazo derecho de los Boluarte tenía una nutrida clientela de policías caídos en desgracia. Entonces su oficina estaba en un edificio sanisidrio de la avenida Paseo de la República.

El 18 de agosto de aquel año el empresario huancaíno Juan Arrieta Alanya presentó una denuncia policial contra Santiváñez por una presunta estafa de S/ 12,650.

Arrieta denunció que en marzo del 2014 buscó los servicios de Santiváñez porque a su hija Daniela le habían abierto un proceso disciplinario por entregar un documento falso en la Escuela Superior de la Policía. El hombre quería evitar que la institución diera de baja a su hija. Buscando a un abogado eficaz, el padre llegó a Santiváñez, recomendado en la misma escuela como alguien con "contactos" que "solucionaba" problemas.

Arrieta entregó a Santiváñez S/ 3,000 como adelanto de sus honorarios y otros S/ 9,650 para "gastos administrativos". En la denuncia policial Arrieta dijo que Santiváñez "no cumplió con su trabajo dando lugar a que su hija sea dada de baja en forma definitiva indicando que el abogado asumió un compromiso que, en caso no dé resultados su asesoría, se comprometió a devolverle el íntegro del dinero".

Arrieta dice en la denuncia que Santiváñez se negó a devolverle su dinero, pero ante su insistencia le dio un cheque de Interbank de USD 1,200. Cuando se acercó al banco a cobrarlo, la entidad financiera le dijo que no tenía fondos y que la firma era falsa. Eso motivó que Arrieta hiciera la denuncia.

El caso quedó solo a nivel policial. Arrieta falleció hace un año. Su hija, Daniela Arrieta, la policía expulsada, confirma la existencia de la denuncia y explica que los S/ 9,650 eran en realidad para pagar a "conocidos" e "influencia". ■

Denuncia policial por estafa presentada en el 2014 contra Juan José Santiváñez. El empresario huancaíno Juan Arrieta acusó a Santiváñez de prometerle limpiar a su hija de un proceso disciplinario en la Escuela de la Policía a cambio de S/ 12,650. No cumplió y no devolvió el dinero.

porque el Eficcop no tiene facultades para investigar a la inquilina de Palacio. Esa es tarea de la Fiscalía de la Nación, que también está atada de manos por el reciente fallo del Tribunal Constitucional que blindó hasta el 29 de julio del 2026 a la expresidenta del Club Apurímac.

El equipo de Ordaya apunta también al partido Ciudadanos por el Perú como una suerte de centro de operaciones de la presunta banda criminal.

"Juan José Santiváñez y otros investigados de la carpeta fiscal N° 12-2024, en cumplimiento de su rol dentro del brazo de protección de la presunta organización criminal de Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, habrían desplegado presuntas acciones ilícitas para desactivar el entonces Equipo Especial PNP de apoyo

al EFICOP, así como hacerse de información reservada y privilegiada sobre investigaciones seguidas en contra del presunto líder y de los demás miembros de la OC", se lee en el documento fiscal.

En las pesquisas se ha detectado que abogados vinculados a Santiváñez han obtenido S/ 3 millones en contratos. Las adjudicaciones a dedo son para la defensa de funcionarios del Ministerio del Interior. La Fiscalía sostiene, además, que allegados al ministro de Justicia le habrían cobrado USD 160,000 al empresario Franco Parodi por enviar un contingente policial para recuperar la mina "El Dorado", en Arequipa.

El Eficcop también tiene bajo la lupa la compra de 7,323 fusiles para la Policía, otro contrato adjudicado durante



FOTO JOEL DURÁN • HT3

El Tribunal Constitucional le salvó el cuello a Humberto Acuña tras anularle una sentencia de tres años de prisión por cohecho. Quiere ser gobernador otra vez.

El TC-Lavadora

► Cinco tribunos del TC, convertido en refugio de la corrupción, salvaron a Humberto Acuña Peralta de una doble condena judicial por haber sobornado a un policía



FOTO JOEL DURÁN • HT3

Luz Pacheco fue una de las que votó a favor de Humberto Acuña y recomendó que la interceptación telefónica y el resto de pruebas sean invalidadas en un nuevo juicio. Todo un precedente para próximos favores.



FOTO JOEL DURÁN • HT3

El magistrado Gustavo Gutiérrez votó a favor de Humberto Acuña y advirtió, en su voto, que hay "una corriente de criminalización contra gobernadores, alcaldes, dirigentes de partidos y funcionarios".

RICARDO VELAZCO

Si usted se llama Humberto Acuña, el Tribunal Constitucional (TC) zurcido por el fujimorismo y sus socios le permitirá coimear a un poli-

cía, anulará las pruebas en su contra y le echará la culpa a la prensa de sus pecados. Amén. Así lo dispone una sentencia del TC que anuló de un plumazo una condena al exgobernador de Lambayeque. El objetivo de los tribunos es

marcar el derrotero para los audios de "los cuellos blancos".

Humberto Acuña Peralta, otro de los hermanísimos del clan Acuña, fue sentenciado a tres años de prisión suspendida en dos instancias. La condena fue por pagar una coima

de 1,500 soles a un policía para que le echara una mano en una investigación fiscal. La trama de la aceitada quedó recogida en una interceptación telefónica realizada por la Policía y ordenada por un juez.

Los abogados del exgobernador de Lambayeque estaban tan confiados de que el fallo en el Constitucional sería favorable que ni siquiera acudieron a la audiencia presencial programada para el 28 de mayo pasado. No hizo falta. La presidenta del TC, Luz Pacheco, y su colega Gustavo Gutiérrez Tisce fungieron de entusiastas defensores de Acuña. "Se ha podido advertir la afectación de los derechos a la presunción de inocencia, de defensa y a la debida motivación de las resoluciones judiciales del amparista", dice Gutiérrez Tisce en su voto.

"Creo que los magistrados han resuelto viendo el nombre antes que los hechos. En la sentencia contra Acuña se usaron como pruebas unas interceptaciones telefónicas obtenidas con autorización judicial. El condenado cuestionó la validez de estas interceptaciones y el TC le ha dado la razón. Si una persona común y corriente presentara una medida similar, el TC no le haría caso", dice el abogado penalista Jimmy Sotomayor.

"La sentencia ha generado incomodidad en Chiclayo. Muchas veces hemos pedido al TC medidas similares a favor de

personas comunes y las han declarado improcedentes. Si tomamos una muestra de 100 casos, este sería la excepción", dice Jorge Pérez Cerdán, un conocido abogado en Lambayeque.

Pérez advierte que el TC ha sentado un precedente para casos emblemáticos como "Los Cuellos Blancos del Puerto", cuyos expedientes se sostienen en interceptaciones telefónicas legales. "Es muy probable que ahora muchos vean al TC como la cuarta instancia. Cualquiera con un mínimo de lógica va a recurrir a esto", dice.

Juan Carrasco Millones era fiscal contra el crimen organizado en el 2014, cuando la justicia empezó a pisarles los talones a "Los Limpios de la Corrupción", cuyo cabecilla era el exalcalde Roberto Torres. Fue en ese contexto que el fiscal solicitó al Juzgado de Investigación Preparatoria interceptar los teléfonos de los delincuentes que integraban la organización. Uno de ellos era el suboficial PNP Joel Ugaz Cubas. El juez autorizó la interceptación y del trabajo de campo se encargó el equipo "Constelación" de la Policía.

Entre el 26 y el 29 de septiembre del 2014 la Policía captó conversaciones entre el suboficial Ugaz y Élver Díaz Bravo, un exmilitante aprista que había sido procurador durante el segundo alanismo. Ambos habían trabajado juntos. Díaz es el cuñado de César Acuña, está casado con María Acuña, la congresista.

"Ya hablé con el hombre, kilo y medio dice. Le voy a decir que ya, para que de una vez, los mil quinientos", le dijo Díaz al suboficial en una de las conversaciones interceptadas. "Pero medio kilo para ti y un kilo para mí", le respondió Ugaz. "Mitad, mitad hemos quedado", aclaró el cuñado de Humberto Acuña.

El suboficial y Díaz estaban negociando un pago para que el policía elaborara una declaración ficticia de Acuña durante una investigación que se le había abierto por haber falsificado documentos de su partido. El exprocurador instruyó a Ugaz: "Hazle su declaración y lo hacemos firmar. Hazle sus respuestas, porque él ya me autorizó por el tema del billete. Aparte que al hombre lo vas a tener ahí de la mano para cualquier cosa".

Los agentes de Constela-



El suboficial PNP Joel Ugaz Cubas. Acuña le pagó 1,500 soles para que lo ayude en una investigación en el 2014.



El magistrado Manuel Monteagudo se opuso tajantemente a anular la sentencia contra Humberto Acuña.



Elver Díaz, cuñado de Humberto Acuña y exprocurador aprista. Díaz fue quien negoció con el suboficial Joel Ugaz.

a una persona en base a una grabación. La Corte Suprema ya tiene un criterio definido: señala que una persona que tiene una comunicación asume el riesgo de que lo pueden grabar, más aún si confiesa un delito", explica el abogado Jimmy Sotomayor.

Hernández arguye que los agentes del equipo Constelación debieron detectar que la orden judicial "era defectuosa y mal justificada". "Esta es la primera vez que el TC sostiene una posición semejante", señala en su voto Manuel Monteagudo, uno de los magistra-

caso su abogado y cuñado—en conversación con otra persona. El favorecido no participó directamente de la conversación determinante para investigar y condenarlo", arguye el magistrado en la sentencia.

El tribuno acusa al Poder Judicial de no haber demostrado que Acuña pagó la coima omitiendo descaradamente que durante el juicio el audio no fue la única prueba incriminatoria.

La presidenta de la entidad, Luz Pacheco, dio un paso más que su colega Hernández y recomendó que se invaliden "todas las pruebas obtenidas a partir de la prueba ilícita (las interceptaciones telefónicas)". Pacheco acusa a la Fiscalía de actuar de mala fe. "Es evidente que se obtuvo información para incriminar al recurrente, a partir de la violación del derecho al secreto de las comunicaciones de don Joel Ugaz Cubas, en tanto no se precisó claramente las razones de la intervención telefónica realizada en su contra", dice Pacheco en su voto.

"Está probado que en octubre del 2014 se encontró en la computadora de Joel Ugaz una declaración de Acuña a pesar de no haberse apersonado a la investigación. Lo convenido vía telefónica, en efecto, se estaba ejecutando. Más importante aún: quedó probado que el recurrente se comunicó reiteradamente con Elver Díaz cuando este intercedía irregularmente en su favor con el suboficial Ugaz", dice la sentencia que dictó la Tercera Sala de Apelaciones de Lambayeque.

El magistrado Hernández alega que, en realidad, Acuña es una víctima de la prensa. "El TC no deja de advertir el impacto que tienen en la presunción de inocencia los medios de comunicación. En tales situaciones, especialmente si el personaje es impopular, se produce una condena social que funciona como una suerte de juicio popular que determina el actuar de los jueces que conocerán el caso", dice el texto del magistrado.

Su colega Gutiérrez Tisce opina igual y lo dejó plasmado en su voto: "hay una corriente de criminalización contra gobernadores, alcaldes, dirigentes políticos y funcionarios". El Tribunal Constitucional es de facto la lavandería de los corruptos. ■

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE : 06011-2015-32-1706-JR-PE-01
ACUSADO : ELVER DIAZ BRAVO Y HUMBERTO ACUÑA
AGRAVIADO : EL ESTADO
DELITO : COHECHO ACTIVO GENERICO
JUECES : VICTOR TORRES SANCHEZ, BETTY RODRIGUEZ LLONTOP Y REYNERIO DIAZ TARRILLO (D.D.)
ESPECIALISTA : RITA CEFEDA HERRERA

SENTENCIA DE VISTA N° 33-2020

RESOLUCION NUMERO: VEINTICINCO
Chiclayo, uno de setiembre del año dos mil veinte.

VISTOS Y OIDOS, en audiencia pública los recursos de apelación interpuestos por los imputados ELVER DIAZ BRAVO¹ y HUMBERTO ACUÑA PERALTA²; en el proceso seguido en su contra por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho Activo Genérico, en agravio del Estado. Habiendo votado la causa los jueces superiores Torres Sánchez, Víctor (P), Rodríguez Llontop, Betty y Díaz Tarrillo, Reynerio (D.D.) se emite la presente resolución:

I. RESOLUCION MATERIA DE APELACION.

1.1. Es materia del recurso de apelación la sentencia contenida en la resolución número diecisiete del dos de diciembre del año dos mil diecinueve, emitida por el Juez del Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en delitos de corrupción de funcionarios, mediante la cual se: i) **CONDENÓ** al acusado JOEL UGAZ CUBAS como autor del delito de cohecho pasivo propio previsto en el primer párrafo del artículo 393° del Código Penal, en agravio del Estado-Ministerio del Interior, y como tal se le impuso cinco años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, se le impuso la pena de inhabilitación por el mismo plazo de cinco años, la misma que consiste en la privación de la función, cargo o comisión que ejercía el condenado, en la incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público de conformidad con el artículo 36°, incisos 1) y 2) del Código Penal, y ciento ochenta días multa, que equivalen a cinco

1 ELVER DIAZ BRAVO con DNI 16763942, nacido el 14 de noviembre de 1963, con domicilio en la calle Rivera de la Piedra N° 145, urb. Arturo Cabropas Faltá.
2 HUMBERTO ACUÑA PERALTA con DNI 18172995, nacido el 23 de abril de 1966, con domicilio en la Mz. Lote 6 Av. Villa del Norte departamento 701 del Chiclayo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pleno. Sentencia 155/2025
EXP. N° 02045-2024-PA/TC
CHICLAYO
HUMBERTO ACUÑA PERALTA

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 17 días del mes de julio de 2025, el Tribunal Constitucional, en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los señores magistrados Pacheco Zerga, presidenta, Domínguez Haro, vicepresidente, Morales Saravia, Gutiérrez Tisce, Monteagudo Valdez, Ochoa Cardich y Hernández Chávez, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro y Gutiérrez Tisce, y los votos singulares de los magistrados Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich que se agregan

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Humberto Acuña Peralta contra la resolución de fecha 2 de abril de 2024 (*), expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que confirmó la sentencia que declaró infundada la demanda de amparo de autos

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 1 de marzo de 2022 (*), el recurrente interpone demanda de amparo contra los jueces del Décimo Juzgado Penal Unipersonal Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, el procurador público del Poder Judicial y el procurador público del Ministerio del Interior. Pretende la nulidad de las siguientes resoluciones judiciales: (i) Resolución 17, de fecha 2 de diciembre de 2019 (*), que, entre otros, lo condenó como cómplice secundario del delito de cohecho activo genérico, le impuso tres años de pena privativa de libertad con reglas de conducta, y fijó en S/30 000 000 la reparación civil, que será pagada solidariamente; (ii) Resolución 25, de fecha 1 de setiembre de 2020 (*), que confirmó la Resolución 17, y; (iii) auto de calificación de fecha 27 de agosto de 2021 (*), que declaró

* Folios 118
* Folios 5
* Expediente 06011-2015-32-1706-JR-PE-01, a fojas 2 del cuaderno acompañado
* Folio 78 del cuaderno acompañado
* Causación 926-2020 Lambayeque, a fojas 134 viciada del cuaderno acompañado, notificada el 18 de enero de 2022, según constancia a fojas 134.

La sentencia del Tribunal Constitucional que revocó las penas contra Humberto Acuña y Elver Díaz.

Sentencia de la Sala Penal de Apelaciones que ratificó la condena de tres años de prisión suspendida contra Humberto Acuña en el 2020. Su cuñado, Elver Díaz, fue condenado a cuatro años.

ción se dieron cuenta de que buscando un delito, se habían encontrado con otra trama de corrupción. Así que entregaron el material a Carrasco y este, como no era su caso, lo envió a su vez al despacho de la Fiscalía Anticorrupción.

Se abrió una investigación que incluyó la incautación de la computadora del suboficial Ugaz. Y allí se encontró un archivo con el título "Declaración de Humberto Acuña". "Desde la pregunta número 17 a la pregunta 34 aparece la pregunta y la respuesta", consignaron las autoridades.

En noviembre del 2019 el

suboficial Ugaz murió en un accidente. Días después el Décimo Juzgado Penal condenó a Acuña y a su cuñado a tres años de prisión suspendida por haberlo sobornado. El exgobernador apeló afirmando que la interceptación telefónica no había sido debidamente justificada y que se le había iniciado una investigación sin informar al Poder Judicial. La Tercera Sala de Apelaciones confirmó las sentencias en setiembre del 2020. La Corte Suprema falló de la misma manera. Humberto Acuña no ingresó a prisión porque la pena era

menor a cuatro años. El año pasado inició los trámites para limpiarse en el TC.

Acuña solicitó al Constitucional que revoque su condena y ordene un nuevo juicio. El magistrado Pedro Hernández Chávez, exasesor parlamentario de las congresistas Luciana León y Yesenia Ponce, fue el ponente.

Oficiosamente, Hernández hizo de abogado del demandante. En los argumentos de su ponencia sostiene que el exgobernador de Lambayeque fue víctima de una interceptación telefónica irregular, aun cuando fue ordenada por el Poder Judicial.

"El TC se centró en analizar si puede condenar o no

dos que con su voto singular se opuso a limpiar a Humberto Acuña. El otro que se opuso fue César Ochoa Cardich.

"Las interceptaciones fueron completamente legales y ahí están sus resoluciones. Lo que pasa es que ese señor quiere ser gobernador otra vez y necesita limpiarse de eso. Para nadie es un secreto que el TC está beneficiando a corruptos y mafiosos", dice Juan Carrasco.

El tribuno Hernández califica las grabaciones como "prueba ilícita" y sostiene que Acuña fue injustamente castigado por el Poder Judicial. "Fue condenado e investigado a partir de la mención realizada por un tercero —en este

Guardianes del infierno

► La Pampa es el Vraem de la minería ilegal, los asesinatos impunes y las mafias armadas que cobran cupos millonarios por dar seguridad. Esta es la historia de una nueva república del crimen



Samuel Sánchez Irene, alias "El Venado", primer cabecilla de Los Guardianes de la Trocha.

SHANNA TACO

Era de madrugada cuando más de doscientos policías irrumpieron en La Pampa, el bastión de la minería ilegal en Madre de Dios. Iban tras Los Guardianes de la Trocha, la banda de forajidos que se ha especializado en cobrar cupos a los mineros al margen de la ley. Una semana después el estruendo de una

balacera dejó claro a los pobladores que las trochas siguen bajo el control de la banda.

La Carretera Interoceánica que atraviesa Inambari (que prometía disparar el comercio con Brasil) se ha convertido en la autopista de los mineros ilegales.

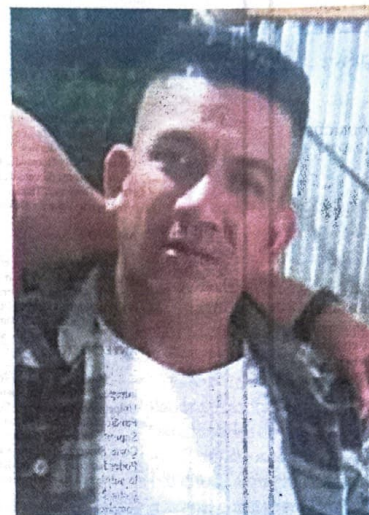
Desde el 2011, cuando se concluyó la obra, miles de mineros se asentaron en La Pampa y poco a poco empezaron a ocupar la zona de amortiguamiento de la Re-



Edinson Fernández Pérez, alias "Chili", eventual líder de la banda.



Yván Fernández Pérez, alias "Tony", sucesor de alias "Rodrigo".



Edy Tacto Huamán, alias "Rodrigo", sucesor de "El Venado".



John Fernández Pérez, alias "Coco", lugarteniente y segundo al mando de la organización.

serva Nacional de Tambopata. Los pobladores aseguran que hoy el campamento ilegal se extiende del kilómetro 68 al 120 de la carretera.

Con el avance del asentamiento ilegal también se extiende el dominio de Los Guardianes de la Trocha, una banda que impone su ley y sus "impuestos" a punta de plomo y sangre.

"Ellos son el gobierno aquí", dice un lugareño. Revelar su nombre sería ponerle precio a su vida. Todos temen las represalias de "Chili".

Edinson Fernández Pérez (31), alias "Chili", es el líder de Los Guardianes de la Trocha desde hace un año. Su hermano John Fernández Pérez, conocido como "Coco", funge de lugarteniente y segundo al mando. Y debajo de ellos está Albert Carranza Fernández, alias "Albert". Los temidos gatilleros son Giner Linares Leandro, alias "Gringasho", y

Alejandro Villalobos Llanos, alias "Mackey". La organización cuenta con no menos de 100 integrantes.

Los Guardianes de la Trocha lleva diez años operando en La Pampa. Al inicio los campamentos mineros los contrataban voluntariamente como seguridad. Con el tiempo el negocio cambió. La banda impuso sus cupos y el que no paga, muere.

Fuentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que lleva dos meses detrás de la banda, describen un "sistema impositivo" que poco tiene que envidiar a la Sunat.

No sólo cobran un cupo por "la seguridad" de los mineros sino por cada una de las actividades que realizan y por la maquinaria que utilizan. Por los motores -los de bombear agua y los de remover tierra- exigen entre 200 y 500 soles. La tarifa depende del estado

y de la productividad de la máquina. Y una draga puede tener de 2 a 6 motores.

En La Pampa las dragas pasaron de 148 en 2021 a 598 en 2023, un salto del 400%, según estimaciones del Observatorio de Minería Ilegal. Sólo con los motores, las ganancias superan el millón de soles mensuales libres de impuestos.

En La Pampa nada se mueve sin rendir cuentas a Los Guardianes. Cada vehículo paga cinco soles por ingreso a los campamentos, sea en moto o en auto. A modo de peaje hay unas garitas tomadas por los soldados de la banda criminal.

Los comercios también están sujetos al impuesto de Los Guardianes: bodegas, bares, restaurantes, prostíbulos, ferreterías, grifos y locales de insumos mineros, todos pagan entre 500 y 3,000 soles mensuales.

Los lugareños cuentan que,



El pasado 18 de agosto la Diviac lideró un operativo en La Pampa. Incautaron fusiles, granadas, pistolas, municiones, vehículos y S/ 62,458 en efectivo. El cabecilla huyó antes.



Giner Linares, alias Gringasho, y Albert Carranza, alias Albert: gatilleros de la siniestra pandilla.

además de cobrar cupos, la banda criminal posee dragas propias, controla el acopio y comercio del oro y dirige la expansión de La Pampa.

"Nadie se salva. A los agricultores nos ofrecen dinero a cambio de dejar nuestras tierras. Muchos han aceptado 100 mil soles por irse. A veces, si no aceptas, te matan", dice un agricultor de la comunidad de Santa Rita, ubicada a dos kilómetros de La Pampa.

Dicen los lugareños que todo se inició con una pequeña invasión a la que no dieron importancia. De aquello hace 16 años.

"La primera vez que llegué ahí fue en el 2007. A los pobladores de las comunidades aledañas les preocupaba que los mineros pasen a la zona de amortiguamiento de la reserva. Eso pasó porque, pese a los reportes, ninguna entidad pública hizo nada",

detalla el periodista del medio "La cara del pueblo" Manuel Calloquispe.

El reportero recuerda que el primer campamento minero fue "Mega 11". Apareció el 2009. La policía acudía de vez en cuando para inutilizar los motores, pero los mineros los reemplazaban en cuestión de horas. Hacia 2014 la fiebre aurífera atrajo a cusqueños, ayacuchanos, puneños y sanmartinenses.

"Vinieron a deforestar la zona para darle espacio a la minería -detalla otro lugareño-. Fue por esa fecha que llegó 'El Venado', que con el tiempo sería el primer cabecilla de Los Guardianes".

Samuel Sánchez Irene, alias "El Venado", era de San Martín y llegó a La Pampa para ofrecer sus servicios de seguridad y frenar a los delincuentes que robaban oro y maquinaria. "Como era oro

ilegal la gente no podía defenderse, no podían denunciar", recuerda un poblador.

Exdirigente de rondas campesinas, Sánchez Irene tenía habilidad en el manejo de armas. El campamento "Mega 14" lo contrató. Le fue bien, así que enseguida fue sumando clientes e invirtiendo en el negocio de la seguridad. En poco tiempo se hizo de un arsenal y un ejército de reclutas. Y entonces explotó la violencia.

En 2016 se registraron las primeras denuncias por "desaparecidos": jóvenes que partían a La Pampa en busca de trabajo y nunca más regresaban. Entre ellos, el mototaxista Eloy Ovalle Fasabi, cuyo nombre aún recuerdan los pobladores.

Entre la población empezó a correr el rumor de que existía un lugar donde asesinaban y quemaban personas. En marzo de 2017 aquella siniestra

habladuría de vecinos se confirmó. Medios nacionales informaron del hallazgo de El Quemadero, un descampado lleno de residuos de hogueras donde varias familias recuperaron los restos incinerados de sus seres queridos. Allí estaba el cuerpo calcinado de Eloy Ovalle.

"Cuando el Estado por fin recupere la zona se va a necesitar una comisión de la verdad, sin duda se hallarán fosas comunes. Estamos hablando de cerca de 700 personas desaparecidas desde el 2012", dice el especialista en seguridad Jaime Antezana.

En el 2019 el gobierno de Martín Vizcarra destinó 200 millones de soles para llevar a cabo el Operativo Mercurio, un plan ambicioso cuyo objetivo era recuperar La Pampa. Aquello -dicen los locales- asustó a "El Venado", pues "sabía que venían por él". Así que puso tierra de por medio después de venderle el negocio a su lugarteniente, Edy Tocto Huamán, alias "Rodrigo".

"Durante el Operativo Mercurio no obtuvimos información concreta sobre la ubicación de los cabecillas. Desaparecieron. El operativo tuvo tres fases: la primera fue retirar a todos los mineros de La Pampa, la segunda fue atacar los lugares próximos donde se estaban trasladando los mineros ilegales y la tercera era la fase de estabilidad. Es decir, mantener esa zona libre de minería ilegal. Debía realizarse un plan de restauración, pero eso nunca ocurrió. El 2021 volvieron con fuerza", detalla Karina Garay, exfiscal

que participó del Operativo Mercurio.

En octubre del 2020 fue asesinado "Rodrigo" en una emboscada. Su legado a La Pampa fue la multiplicación de prostíbulos y la llegada a la zona de Yván Fernández Pérez, alias "Tony", otro exrondero de San Martín.

Con "Tony" llegó su primo Edinson Fernández Pérez, alias "Chili". Fuentes de la zona aseguran que fue él quien mandó matar a "Rodrigo" y luego a "Tony" en marzo del 2024. Desde entonces mantiene un enfrentamiento a punta de balas con "Brayan", hermano del difunto "Tony", por el control de La Pampa.

En abril pasado fue sentenciado a 15 años de prisión por el asesinato del ambientalista Julio Fernández Hanco (marzo del 2022). Hasta ahora ha burlado la orden de captura.

La madrugada del último 18 de agosto más de 200 agentes de la Diviac, Dirin, Dirandro, Suat y Grecco ingresaron a La Pampa para ejecutar un megaoperativo. Incautaron 11 vehículos, 3 fusiles, granadas, pistolas, cientos de municiones y S/ 62,458 en efectivo. Detuvieron a 25 personas, pero sólo a dos se les dictó prisión preventiva. "Chili" salió reforzado de la intervención.

"Brayan ha perdido fuerza sobre todo porque esas incautaciones del último operativo eran de su bando", comenta el periodista Manuel Calloquispe.

El reportero estaba alistando un reportaje sobre las bandas cuando el último 28 de agosto recibió una amenaza de muerte por teléfono.

"Me pasan con 'Chili'. Durante toda mi carrera he sido atacado unas diez veces, pero esta es la primera vez que el criminal al que investigo me llama abiertamente. Nadie antes había puesto el nombre de él como capo de La Pampa en una publicación y yo lo hice", cuenta Calloquispe, periodista, corresponsal de Infografía, "El Comercio" y Latina.

El delincuente no se anduvo con rodeos. "Ya sabes, no me estés publicando nada de La Pampa, conchatumadre, te vas a morir. Ya sabes por qué te estoy llamando -le dijo-, así que métete el dedo antes que vaya y arranque la cabeza a tu familia". ■

La Chávez y la China

► A pocas semanas de publicar una sentencia en favor de Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional surgido del Congreso intenta lavarse la cara liberando a Betssy Chávez Chino y basándose en una clamorosa omisión del Ministerio Público

BRUNO AMORETTI

Betssy Chávez Chino ha pasado de "víctima" a coartada. El Tribunal Constitucional (TC) la liberó por un error fiscal de diciembre del año pasado. Con la inminente sentencia que limpiará a Keiko Fujimori en el caso Cocteles, abrirle la puerta del penal a la segura servidora de Pedro Castillo era la carta que necesitaban Luz Pacheco y su banda de colegas. La de Chávez, en cambio, es una libertad de corto alcance. A fines de año estará lista la sentencia por el golpe de Estado y es bastante probable que sea condenada. Y si vuelve a prisión, Chávez tendrá un recibimiento hostil.

Durante los 804 días que pasó tras las rejas, Betssy Chávez siguió sumando enemigas. Las personas cercanas a la expremier tienen versiones distintas sobre el momento en que el encierro en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos se convirtió en una "tortura".

Raúl Noblecilla, su abogado, asegura que denunció "abuso, reglaje y hostigamiento" desde el primer día de su ingreso en el penal, en junio de 2023. "En marzo de este año denuncié una tortura en su traslado al penal. La encadenaron de brazos y pies y sufrió golpes dentro de la caja metálica del vehículo", afirma.

La congresista Nieves Limachi, íntima amiga de Chávez y una de las personas que la visitó asiduamente

en Chorrillos, sostiene que los maltratos fueron "progresivos" y que la expremier estuvo "tranquila" durante dos años. "Ella ha estado tolerando -afirma Limachi-, viendo todo lo que ocurría".

El 8 de julio Chávez arremetió públicamente contra el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) con denuncias de corrupción y crimen organizado. "Para mí es muy penoso y muy vergonzoso vivir diariamente el chantaje sexual, los sobornos, el pago de celdas a través de dádivas y obtener economatos con pago de cupos", dijo en una audiencia del juicio por rebelión y traición a la patria.

Noblecilla evita entrar en detalles de la denuncia de su patrocinada. "La investigación de la Fiscalía es reservada", responde. Solo precisa que "el personal de seguridad a cargo de custodiar los pabellones pide servicios sexuales a cambio de beneficios".

Limachi sostiene que Chávez decidió revelar la "corrupción" porque no la dejaban usar los baños públicos. "Si ella no tenía visitas -dice Limachi-, no podía utilizar el baño, y tenía que recurrir al silo de su celda".

También la amenazaban -asegura la congresista- las presas venezolanas. "Eran del Tren de Aragua, la empezaron a amenazar (...). Seguramente pensaron que tiene mucho dinero", dice.

Chávez pidió su traslado a otro penal. Y como no atendieron su solicitud, anunció en la quincena de



Betssy Chávez ya en libertad junto al congresista Roberto Sánchez luego de 11 días de presunta huelga de hambre seca.

julio que empezaba una huelga de hambre. El 19 de agosto dijo que radicalizaría la medida con una huelga seca, sin ingerir líquidos.

El INPE y la mayoría de internas pusieron en duda la versión de Chávez y su entorno. Dos conocidas organizaciones de derechos humanos la visitaron en el penal para saber de las condiciones de la interna.

INFORMES PREVIOS

El 3 de junio, un mes antes de que Chávez denunciara en la audiencia los tratos vejatorios en la cárcel, el INPE había elaborado un informe recogiendo las quejas de otras presas contra ella y Yahaira Santiago Ascencio, otra reclusa con la que se le relacionaba sentimentalmente.

Una carcelera señaló que "la relación amorosa suelen demostrarla atentando contra la moral de las demás compañeras, quienes no se sienten respetadas". También anotó que "la interna Chávez Chino responde de manera altanera al personal de seguridad cuando le llaman la atención por su comportamiento".

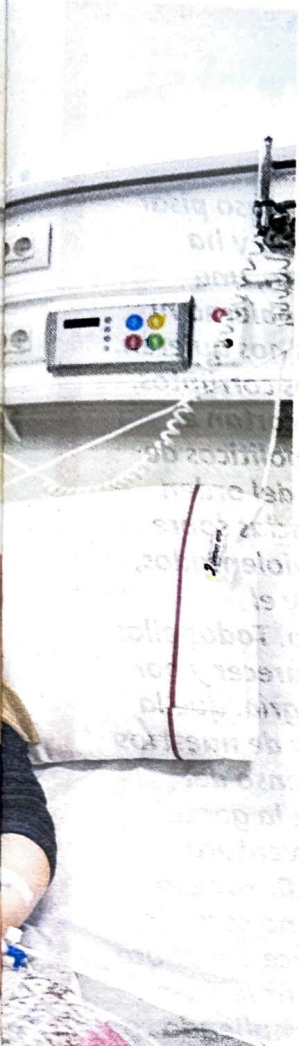
A finales de junio de este año cinco delegadas del pabellón enviaron una queja a Nelly Aquino Guardales, directora del penal. "En nuestro pabellón de más de cien internas habitan aproximadamente una decena de parejas de opción por varios años y ninguna de ellas ha tenido este comportamiento contrario a la moral, más bien, han sido muy respetuosas de los diferentes puntos de vista", se

lee en el documento.

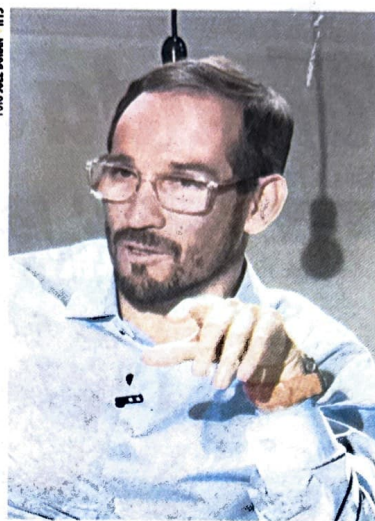
En los días siguientes llegaron más reclamos. El 1 de julio las autoridades del penal optaron por separar a Chávez y Santiago en distintos pabellones. Al día siguiente Limachi se reunió con la directora para pedir que volvieran a estar juntas. La solicitud no prosperó. "Lo que le dije a la directora fue que procure la buena convivencia de las internas. Eso fue, nada más", explica la congresista.

Las discrepancias se volvieron fractura total el día que Chávez denunció corrupción en plena audiencia. Se abrió una investigación interna que recogió casi 20 testimonios contra la expremiera ministra. El abogado de Chávez deslegitima el informe.

"A partir de la denun-



Jennie Dador, miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: "Nosotros la vimos bien, se conducía, caminaba, estaba en el patio (...) Supuestamente ella para esa fecha llevaba tres a cuatro días de huelga de hambre seca. Eso no correspondía en realidad al reflejo de lo que veías".



Marco Carvajal, médico internista, sobre los exámenes físicos de Betsy Chávez difundidos este lunes: "Su cuerpo no se encontraba en un estado grave o crítico. Su frecuencia cardíaca refleja que no había un cuadro de deshidratación severa. Los signos que yo veo son de bastante estabilidad".



Un grupo de seguidores de Betsy Chávez acampando en las afueras del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos el último lunes.

cia de Betsy Chávez, se convocó a las delegadas de los pabellones que son de Sendero Luminoso. Estas señoras disfrutaban de un co-gobierno mafioso en el INPE e influyeron en las demás internas para echarle la culpa de todo a Betsy", afirma Raúl Noblecilla.

La investigación del INPE concluyó que no había "evidencias que pongan en riesgo su integridad personal". También rechazó el pedido de Chávez de ser trasladada a otro penal con Santiago y una tercera reclusa. "Cualquier solicitud siempre se hace de manera individual, no en grupo de tres", explica Ángel Llancari, secretario general del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios.

"Cuando hay este tipo de internos que son políticos, o que creen tener cierto

poder -agrega Llancari-, quieren imponer su forma de ser frente al orden que se debe cumplir en un penal. La señorita Chávez se ha victimizado y ha buscado ser favorecida a través de su poder político".

El 26 de agosto una comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) visitó el penal. Según sus representantes, detectaron un conflicto entre Chávez y la mayoría de internas, aunque distinto al que ella describía.

"Muchas señalaron que el penal funciona incluso mejor que otras veces, que puede haber denuncias o comportamientos indebidos del personal del INPE, pero de

ahí a que haya tortura, no... Ella estaba asignada a unas celdas más privadas que se conocen como 'cabinas', ahí compartía con tres personas un televisor y una jarra para hervir agua", afirma Jennie Dador, miembro del Consejo Directivo de la CNDDHH.

"En el penal se ha generado una situación de tensión a raíz de las denuncias que ella ha hecho -continúa-, y que otras consideran que no se ajustan a la realidad. Algunas manifestaron que tienen que obedecer reglas y muchas veces en los procesos de adaptación eso es algo que cuesta. Sobre todo cuando has sido tan joven y premier. No todas reaccionan igual a que te den órdenes

y obedezcas reglas. Ella está cerca de la condena, obviamente hay desencadenantes psicológicos".

Sobre su salud, la comitiva no advirtió un peligro inminente. "Nosotros la vimos bien, se conducía, caminaba, estaba en el patio. Y dijo que tenía la presión un poco elevada, pero dentro de los rangos normales. Dijo que el médico le había dicho que estaba algo deshidratada. Supuestamente ella para esa fecha llevaba tres a cuatro días de huelga de hambre seca. O sea, eso no correspondía en realidad al reflejo de lo que veías, pero yo no soy médica", sostiene Dador.

El INPE trasladó luego a Chávez al Hospital Ma-

ría Auxiliadora. Noblecilla difundió sus exámenes médicos. Especialistas consultados consideran que no reflejan el cuadro de una persona con diez días de huelga seca.

"Al momento de este examen, su cuerpo no se encontraba en un estado grave o crítico. Su frecuencia cardíaca refleja que no había un cuadro de deshidratación severa. Su presión arterial también era estable. Los resultados también arrojaron que se encontraba completamente lúcida", explica Marco Carvajal, médico internista.

Un médico intensivista coincide. "Debería estar muchísimo peor bajo un escenario de huelga de hambre seca, al borde de la muerte o ya muerta. Por los análisis de sangre, parece que no comía hace 12 horas o máximo 24 horas".

Las denuncias de Chávez coincidieron con la recta final de su hábeas corpus ante el TC. En diciembre del año pasado finalizó el plazo de la prisión preventiva. La expremier debió salir en libertad debido a que la fiscal Galinka Meza no había solicitado prolongar la medida carcelaria. Vencido el plazo, la Fiscalía subsanó el error una semana más tarde. El tribunal determinó que Chávez estuvo ocho días arbitrariamente presa y, de acuerdo a ello, ordenó su liberación.

"La regla que ha dictado el TC es que, por este caso, Betsy Chávez ya no puede volver a la cárcel bajo una prisión preventiva. Si la condenan eventualmente, podría volver a prisión", explica el abogado penalista Elí Vidal.

La sentencia a favor de Chávez le cayó como anillo al dedo al fujimorismo. Sirve de coartada para lo que se viene en pocas semanas. Fuentes del TC confirmaron que la sentencia a favor de Keiko Fujimori por el caso Cocteles ya está en elaboración y se haría pública a más tardar en octubre. "Ya están los cuatro votos en mayoría", dice un informante de la Casa de Pilatos.

Martha Moyano, una de las más fieles subalternas de "madame K", lo resumiera en redes. "Los que decían que el TC era fujimorista, están callados". ■

La llamada de la tribu



Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea.

Ayúdanos a continuar.

Plutón Editores S.A.C.



Donar aquí con Yape

975 525 500

Los últimos días de la gran prensa



DANIEL ESPINOSA

démicos que mejor se acomodan y por la gran prensa –precisamente porque les permite a sus periodistas presentarse como gente muy independiente–, no sería más que una fantasía que los dueños de los medios y sus fieles editores repiten para ocultar su propaganda.

Las múltiples cartas abiertas que cientos de periodistas de la gran prensa han escrito en los últimos veintidós meses, denunciando la cobertura de sus propios medios como sesgada en favor del régimen *apartheid* de Benjamín Netanyahu, deja claro que lo que determina la cobertura es la estructura institucional, no la ideología o las buenas intenciones de los periodistas, meros empleados.

En una reciente carta abierta, más de cien reporteros de la BBC exigieron que se les permita reportar la verdad sobre Gaza, denunciando que su medio –que marca la pauta para cientos de diarios y canales de noticias de todo el planeta– hace “relaciones públicas en favor de Israel” en lugar de periodismo. ¿Qué mejor prueba de que la ideología liberal de estos periodistas no viene a cuento cuando hay que reportar sobre asuntos que resultan cruciales a los intereses de la clase propietaria?

Los disidentes de la BBC no han sido los únicos, también ha habido denuncias de periodistas del “NYT”, de “The Guardian”, del “Financial Times” y la CNN, entre otros.

El enfoque institucional, el verídico, propone que unos medios de propiedad de multimillonarios y grandes conglomerados privados, que viven del avisaje comercial de otras grandes corporaciones, y que además dependen para su suministro de información de poderosos gobiernos y otras instituciones del *establishment*, siempre terminarán sirviendo a intereses de élite.

El martirio de los gazatíes, últimos en una larguísima fila de víctimas sobre las cuales la gran prensa nunca informó de manera honesta, debería ser el último clavo en el ataúd de un aparato de comunicaciones elitista que, desde hace por lo menos cinco décadas, viene perdiendo la confianza de sus audiencias de manera sostenida, como demuestran los sondeos sobre su credibilidad. No culpen a la “posverdad”, el asunto es su descarado doble rasero.

La gran prensa de Occidente es el más reluciente de todos los sepulcros blanqueados, y le debe buena parte de su engañoso prestigio a su propia capacidad para el autobombo, que se refuerza con el elogio vacío de unas instituciones tradicionales putrefactas que dependen de su cobertura sesgada. Es el mutuo espaldarazo de los compinches. ■

ticias siempre nos contaron el cuento de que practicaban un oficio valiente, independiente, contestatario y neutral. Todo era una farsa. La gran prensa ni siquiera se atrevió a levantar la voz cuando las formas más cruentas de violencia se cebaron sobre cientos de periodistas gazatíes. En su lugar, repitió la “hasbara” –la propaganda sionista–, sugiriendo de mala fe que los colegas palestinos quizás eran terroristas en-

cubiertos. El terruqueo no es un fenómeno peruano.

La investigación académica en torno al rol de los grandes medios de comunicación masiva y al periodismo que ahí se practica suele dividirse en dos escuelas. La primera sugiere que ciertos factores de corte institucional y estructural –como la propiedad de los medios, el financiamiento mediante avisaje comercial y la dependencia de



Familiares y colegas de los periodistas palestinos Sari Mansour y Hasona Saliem, que fueron asesinados mientras trabajaban, lloran durante la ceremonia fúnebre en Deir al-Balah, Gaza, el 19 de noviembre del año 2023. (FOTO: Ali Jadallah via Getty Images).

fuentes de información del *establishment* –resultan determinantes al momento de decidir qué se informa y qué no, así como cuál será el enfoque (el “framing”, en inglés).

La segunda escuela sostiene, en cambio, que lo determinante a la hora de decidir qué es noticia sería la ideología de los periodistas que integran los principales medios periodísticos (entre los que destacan “The New York Times”, “The Washington Post”, “The Guardian”, “El País”, la CNN o la BBC) quienes por lo general se declaran liberales o progresistas. Según esta escuela, los grandes medios contribuyen a crear un vigoroso “mercado de ideas”, en el que las más populares terminan convirtiéndose en políticas públicas.

La cobertura sobre el genocidio en Gaza ha demostrado con creces que la primera escuela lleva la razón, mientras que la segunda, la preferida por los aca-

NO CULPEN A LA “POSVERDAD”, EL ASUNTO ES SU DESCARADO DOBLE RASERO

La Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (AIEG), líder entre las organizaciones que investigan esta forma de crimen contra la humanidad, publicó el pasado 31 de agosto una resolución condenando los hechos de Gaza como eso, un genocidio. Aunque los especialistas de la AIEG han llegado a dicha conclusión un poco tarde, lo hicieron por amplia mayoría, sumándose a las condenas hechas con anterioridad por varias otras organizaciones internacionales.

Es una nueva confirmación de que el orden internacional y el derecho humanitario –hechos trizas con la ayuda de quienes decían representarlos desde Washington, Londres, Bruselas y Berlín– yacen entre los escombros de Gaza, o en las mismas bolsas negras en las que descansan los cuerpos sin vida de miles de niños masacrados con armas de última generación.

Esto no está sucediendo a pesar de las enérgicas e insistentes denuncias de la prensa, sino con su activa y descarada complicidad. Las instituciones que decían practicar el mejor oficio periodístico, en defensa del bien común y los valores democráticos, se quitaron la máscara, demostrándole al mundo que, a la hora de la hora, los intereses de élite, los de la clase propietaria, son los que mandan.

El holocausto palestino está ocurriendo, además, mientras millones marchan por las calles de docenas de ciudades de todo el mundo exigiendo el alto al fuego y el fin de un sitio de corte medieval que tiene a cientos de miles enfrentando una hambruna total, mientras dos millones deambulaban de un lado a otro esquivando las bombas, aterrorizados. Ese periodismo –el corporativo, el practicado por los grandes medios de comunicación privados– prefiere no informar sobre estas peligrosas manifestaciones globales de solidaridad y empatía.

Los grandes diarios y cadenas de no-

¡Es nuestra plata y se la llevan!



PEDRO FRANCKE

El mantra de la derecha neoliberal es "sólo la inversión privada salvará al Perú". Creen que por eso el Estado debe darles a los grandes monopolios todas las exoneraciones tributarias, permisos de contaminación, tierras que pertenecen a las comunidades y subsidios que se les ocurra. Pero no son consecuentes con su mantra. Porque al mismo tiempo, bajo la batuta del fujimorismo, acaban de dar la ley 32428, que permite que las AFP se lleven el 80 por ciento de los fondos de los trabajadores al exterior. Eso significa que 91 mil 800 millones de soles, que podrían invertirse en el Perú mejorando tecnologías y generando empleo, se irán afuera. Eso es el triple que la suma de todos los préstamos que las cajas municipales le están dando a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacerse más competitivas y doscientas veces más que todo el crédito que da Agrobanco para apoyar el crecimiento del sector agropecuario. Encima, cada mes, sin falta, aunque en vez de generarnos rentabilidad nos hayan causado pérdidas, las AFP nos cobran más de cien millones de soles por comisiones.

Recordemos que las AFP hoy controlan 114 mil millones de soles que son de los trabajadores. No son de ellas, la ley dice que esos fondos son nuestros. Pero no podemos ni siquiera sugerir adónde debe invertirse ese dinero. Ya hoy una parte se va al exterior. Yo soy aportante y estoy en contra, pero lo que yo quiera hacer con MI plata no importa, las decisiones las toman cuatro grandes grupos financieros que tienen la posibilidad de darse parte de la plata a ellos mismos, algo que en otros países, como Chile y Colombia, está prohibido. ¿Ustedes creen que un conglomerado económico que tiene el poder de controlar mucho dinero de otros no lo va a canalizar a otras empresas del mismo holding en condiciones ventajosas para ellos, aunque eso vaya en contra del interés de los trabajadores?

Permitir que 91 mil 800 millones de soles de NUESTRO ahorro se vayan afuera significa que ese enorme

fondo no promoverá la inversión privada nacional. No financiará inversiones de pequeñas o medianas empresas industriales, no ayudará al progreso del agro, no facilitará la competitividad y el avance tecnológico ni servirá de apoyo para que una infraestructura importante sea realizada. Ninguno de los neoliberales que tanto se llenan la

otras tres son extranjeras: AFP Habitat es chilena, Profuturo es propiedad del Scotiabank, que es canadiense, y la AFP Integra es de un grupo financiero colombiano llamado SURA. Esas cuatro entidades ya han enviado 55 mil millones de soles de nuestro dinero al exterior, la mayoría entregada a otras administradoras de fondos que cobran comisiones adicionales, bajo condiciones y pago de tasas totalmente ocultas. En suma, les pagamos comisiones a las AFP para que a su vez contraten a otras administradoras internacionales pagando más comisiones. Con la nueva ley ahora más de nuestro dinero se irá al exterior de esa manera.

¿Han dicho algo sobre esto los "defensores de la soberanía nacional"? Pienso en esos que ahora se llenan la boca hablando de lo malo que es que nuestro país respete los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado. Hablan de soberanía cuando su verdadera intención es solamente defender a malos policías y militares que han violado mujeres y asesinado a peruanos, incluso jóvenes y adolescentes menores de edad, sin justificación alguna. Pero aprueban que grupos extranjeros puedan llevarse 91 mil millones de soles de los trabajadores peruanos al exterior. Tampoco han dicho nada sobre cómo Trump ha violado groseramente el Tratado de Libre Comercio firmado por Estados Unidos con el Perú. Menos sobre la estafa de Telefónica de España haciéndole perro muerto



Keiko Fujimori: su padre creó las AFP, ella las protege de todas las maneras.

boca de "inversión privada", cuando se trata de defender exoneraciones tributarias o ventajas especiales a las grandes empresas, ha dicho esta boca es mía. Tampoco los congresistas que la aprobaron, por supuesto: cuando dan leyes como esta que son claramente contrarias al interés nacional, lo hacen calladitos y sin ninguna discusión pública, por eso no lo discutieron en el pleno del Congreso sino en la "comisión permanente" con apenas una veintena de representantes.

¿Y quiénes son los que deciden adónde va NUESTRA plata sin que siquiera podamos conocer a qué empresas y financieras se la entregan? Nuestros 114 mil millones de soles los tienen secuestrados apenas cuatro AFP. La AFP Prima es del grupo Credicorp/Romero, que solía ser peruano pero que, como ha reportado esta revista, hoy tiene a su líder viviendo en Panamá, sus empresas dependen de holdings en paraísos fiscales en el Caribe y están vendiendo sus posiciones en Perú para convertirse en transnacional. Las

al Estado peruano. Su patriotismo es más falso que moneda de tres soles.

Regresando a las AFP y a este gobierno Dina-Congreso, la nueva ley les permite llevarse 91 mil millones de nuestra plata al exterior. El año pasado el fujimorismo aprobó una "reforma de pensiones" que incrementa el poder y abusos de las AFP, incluso sometiendo a los independientes a su dominio. ¿Acaso se han reducido las comisiones, tenemos mejores opciones los afiliados, hay más competencia en el sistema tras esta ley? Desde luego que no. Ahora, congresistas oportunistas proponen un nuevo retiro de fondos de las AFP. Crean que aún pueden lavarse la cara hacia las elecciones venideras. Pero su propuesta no mejoraría en nada este pésimo sistema ni ayudaría a que todos los peruanos al llegar a los 65 años tengan un soporte económico adecuado, como debiera ser. Es pura demagogia que tampoco será aprobada por este Congreso: el fujimorismo, hoy en el poder congresal, fidelísimo a las AFP, no lo permitirá. ■

NUESTROS 114 MIL MILLONES DE SOLES LOS TIENEN SECUESTRADOS APENAS CUATRO AFP

Un nuevo juicio para Castillo



GUIDO LEONARDO CROXATTO

Es notable que un excanciller peruano reconozca sin ruborizarse que "Castillo fue destituido por 101 votos por el Congreso". Exactamente eso es lo que sostiene su defensa: que la vacancia es nula, carece de validez jurídica, porque fue "destituido" ("vacado", nunca fue destituido, aunque el canciller no domine la diferencia) por 101 votos. Exactamente: "vacar" (que no es "destituir") a un presidente con 101 votos es inconstitucional. Es bueno que el canciller lo reconozca abiertamente.

Lo que hizo el Congreso aquella tarde con Castillo viola todos los procedimientos legales. Si ni siquiera el excanciller conoce el sistema jurídico de su país, es porque existe mucha desinformación al respecto. Y gran parte de la prensa no informa debidamente. Romper el cerco mediático es importante. Es importante conocer la Constitución.

El Tribunal Constitucional acaba de concluir que no se puede investigar a un presidente en ejercicio. Esto es lo que prescribe la Constitución en su artículo 117, que estipula los casos en modo restrictivo. Lo primero que cabe afirmar es que con Castillo no tuvieron esa precaución: la entonces fiscal Patricia Benavides sí investigó a Castillo cuando este era presidente. Si, tal como afirma ahora el Tribunal Constitucional, tales investigaciones y pesquisas eran inconstitucionales, deben ser tomadas como formas de hostigamiento y acoso a un presidente y su familia. Formas de socavar su

gobierno legítimo. De entorpecer y hostigar a un gobierno con investigaciones que -ahora sabemos- no podían ser legales. Sin embargo, se hicieron lo mismo. Esto no puede no tomarse en cuenta a la hora de ponderar las acciones de Castillo.

Lo mismo sucede con las prohibiciones de salida del país a Castillo, siendo presidente. A Boluarte le han autorizado paseos por el mundo siendo el suyo un régimen no constitucional. El TC varía su criterio según quien esté enfrente.

Se han pronunciado tres juristas de primer renombre internacional en el caso Castillo. Manuel Cancio Meliá, José Hurtado Pozo y Eugenio Zaffaroni. Todos en la misma línea penal: no se configura delito, ni siquiera en el grado de tentativa. Cancio Meliá es el discípulo español del pen-

lista alemán conservador Gunther Jakobs. Nadie se atrevería a pensar que Cancio Meliá es "castillista". Es simplemente un jurista riguroso. Con eso alcanza. Hurtado Pozo sostiene la misma posición desde la Universidad de Friburgo.

Lo que sucede es que los jueces peruanos especulan con la falta de formación cívica de parte de la ciudadanía, que no comprende aún que más allá de la mermelada mediática Castillo puede ser -y de hecho lo es- un presidente mal destituido: la vacancia contra él es nula. Parece un "tecnicismo" constitucional. No lo es.

La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de violaciones a derechos humanos en Perú recoge una historia valiosa (Barrios Altos, La Cantuta) que se ha extendido a todo el continente y ha impregnado positivamente a los diversos tribunales, incluyendo a los argentinos. Retroceder en ese camino no será posible, por más que el régimen irregular actual, encabezado por Boluarte, proponga "salir del sistema interamericano" de derechos humanos, pensando que de ese modo consolidará las normas irregulares que acaban de promulgarse, y que van en sintonía con el indulto a Alberto Fujimori: normas que prescriben crímenes que por su naturaleza son imprescriptibles y normas de amnistía a militares condenados por crímenes graves. Todo esto ha sido cuestionado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Nada de esto es compatible con una democracia constitucional. Tampoco con el sistema interamericano del que Perú es parte. Ahora su régimen propone "salir del sistema". Pero esa "salida", respaldada por "constitucionalistas" locales como Belaunde, no operará ningún rol respecto de lo que sucede ahora. La salida solo funciona para lo que suceda eventualmente después de concretada. Es decir, que no garantizará impunidad, que al parecer es lo único que se busca.

Hoy Perú atraviesa un momento institucional y social crítico sobre el que es menester volver a llamar la atención. Por diversos motivos, entre los cuales el racismo es uno, la detención y vacancia arbitraria de un presidente legítimo (primer presidente rural de la historia) no despierta mucho interés, tampoco en una parte del progresismo (no en toda, por suerte). Pero como abogados nuestra tarea no es aportar un análisis político sino jurídico de lo que sucede en el hermano país. Un magistrado constitucional que votó en disidencia, otorgando la razón a un amparo de Castillo, sostuvo que si bien este fue "vacado violando los procedimientos constitucionales", como sostiene la defensa, el daño cometido "es irreparable".

No es así. El "daño" cometido es reparable (y debe ser reparado): se puede volver a realizar un juicio político a Castillo, pero esta vez sí conforme a Derecho. Los procedimientos no pueden ser inválidos jurídicamente. No se pueden saltar. Se trata de la representación política de todo un país. Ni más ni menos. "Irreparable" es el daño que quedará para la democracia del Perú si este daño a los derechos políticos no se "repara". Y no alcanza con nuevas elecciones. Tampoco si las gana Castillo, como Lula o el MAS en Bolivia. Aun así: el Derecho debe decir algo concreto de la vacancia inconsti-

CONTINÚA EN LA PAGINA 30



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el autor de esta columna.

**UNA DEMOCRACIA NO
FUNCIONA ASÍ. LA POLICÍA
NO DETIENE PRESIDENTES**

CÉSAR
HILDEBRANDT



Recordando a Gary Webb

Cuando Nicaragua era "un peligro" y había que negociar con Irán a ver si así Hezbolá liberaba a algunos rehenes en el Líbano, Ronald Reagan autorizó dos operativos de lo más importantes: que Estados Unidos le vendiera clandestinamente armas a los iraníes –que estaban oficialmente impedidos de recibir armamento después del derrocamiento del Sha– y que la CIA se metiera en una masiva venta de drogas dentro de los Estados Unidos. Con ambos fondos, el surgido de las armas y la cocaína, la contra nicaragüense sería financiada y tendría en jaque al gobierno entonces izquierdista del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Irán liberó, en efecto, algunos rehenes. Y la contra obtuvo hasta decenas de millones de dólares en fondos para compra de armamento, instrucción de su guerrilla, operaciones de sabotaje y golpes contra la infraestructura eléctrica y agrícola de Nicaragua.

Todo un negocio redondo. Toda una exitosa podredumbre. Todo yanqui hasta la médula. Todo imperialismo sin escrúpulos.

Como ustedes recordarán, aquello se llamó el escándalo Irán-Contras. Y como muchos de ustedes habrán de saber, hubo una comisión del Congreso estadounidense por la que desfilaron un par de consejeros de seguridad del presidente (John Poindexter y Robert McFarlane), el malamente célebre teniente coronel Oliver North, director del Consejo Nacional de Seguridad, y hasta el mismísimo presidente de los libres mercados y los ningunos sindicatos: Ronald Reagan. El jefe de la CIA, William Casey, se salvó de los interrogatorios porque murió antes de que las sesiones empezaran (1987). Las conclusiones de aquella investigación oficial fueron duras: el trasiego de armas a Irán y el espantoso asunto de las drogas no se habrían dado si Reagan hubiese vigilado más de cerca a sus subordinados. Salvaron a Reagan, como era de esperar, pero no

podieron evitar salpicarlo.

La sanción, en todo caso, no duró mucho. En 1992 George H. W. Bush indultó a quienes habían sido condenados: Elliott Abrams, Duane R. Clarridge, Alan Fiers, Clair George, Robert McFarlane y Caspar Weinberger. La operación lavado de reputaciones se había completado otra vez.

Cuatro años después, en 1996, el reconocido periodista Gary Webb publicó, con la colaboración de sus colegas Georg Hodel y Leonore Delgado, una serie de artículos en el diario "San Jose Mercury News". En ellos, tras un año de investigación, se demostraba que la participación de la CIA en el tráfico de drogas dentro de los Estados Unidos había sido mucho más grave de lo que se había supuesto originalmente.

Hubo una gran presión sobre el periódico que publicó esos artículos, que fueron la materia prima del libro "Dark Alliance". Fue de tal magnitud ese chantaje desatado desde "las más altas esferas", que el editor del diario, Jerome Ceppos, llegó a admitir que lo escrito por Webb "tenía deficiencias de redacción, edición y producción", aunque "la historia tenía razón en muchos puntos importantes".

Webb fue una víctima más de una campaña de descrédito, pero jamás se retractó de lo que había escrito. En el año 2004, su cuerpo fue hallado en casa con dos balas en la cabeza. La policía, sí señor, declaró que se trataba de un suicidio.

Con el tiempo, Webb ha sido reivindicado. En medios como "The Washington Post" y "Esquire" se han escrito notas valorando su trabajo y su coraje.

Y ahora, además, se sabe, por documentos que fueron revelándose a lo largo de estos últimos años, que el prontuario de la CIA en materia de tráfico de drogas es largo y nutrido.

La CIA recompensó a Hedayat Eslaminia, uno de sus agentes en el Irán del Sha, permitiéndole que traficara heroína en San Francisco. Un señor de las drogas hondureño –Juan Matta Ballesteros– fue simultáneamente agente de la CIA y patrón de la compañía aérea "Setco", activa en la entrega de suministros a la contra que se entrenaba en Honduras. ¿Y no se hizo acaso una película biográfica sobre Adler Berriman Seal, alias Barry Seal, agente de la CIA e introductor en los Estados Unidos de cocaína procedente del cartel de Medellín? ¿Y

podemos ignorar que Gulbudin Hekmatiar, uno de los muhaidines que luchaban contra la invasión soviética de Afganistán, tuvo el pleno apoyo de la CIA a pesar de ser uno de los jefes del tráfico internacional de heroína?

¿Y no fue Manuel Antonio Noriega, narco público y notorio, aliado de los Estados Unidos y dador de ayuda militar a la contra nicaragüense? Su carácter de socio de la Casa Blanca se terminó cuando un avión cargado de coca fue derribado por el sandinismo gobernante y en la nave, tripulada por Eugene Hasenfus, se halló documentación que probaba la sucia conexión de Noriega con la CIA y el tamaño de algunas de las operaciones encubiertas que la agencia realizaba en la región. Por eso cayó "cara de piña", después de una invasión brutal que se presentó como una "guerra contra las drogas".

Ahora, cuando Trump ha convertido a los Estados Unidos en una tragicomedia peligrosa –la Ópera de dos centavos sobre un barril de pólvora–,

llegan los navíos de la redención a amenazar a Maduro, que es, en todo caso, el Noriega del 2025. Llegan los navíos del imperio liderado por un patán y se hunde una supuesta narcolancha con once tripulantes y sale Trump a jactarse de la épica jornada y a decir que el tráfico de drogas caribeño tiene las horas contadas. Y yo me caigo de la risa.

**EL PRONTUARIO DE
LA CIA EN MATERIA
DE TRÁFICO DE
DROGAS ES LARGO Y
NUTRIDO**



Gary Webb mostrando uno de los artículos que nutrieron su libro "La alianza oscura".

El Frontón será una cárcel inclusiva



Diez años sin Wiener



PACO MORENO

Raúl Wiener no fue un estilista de la palabra ni un literato consagrado ni un escritor de ficción, tampoco un investigador académico. Fue un audaz bronquero de la palabra, un combatiente social informado cuya única arma fue siempre la pluma: una pluma tenaz y teñida de verdad.

Era un radical libre, un polemista que escribió sellando un pacto irrompible con los trabajadores organizados, con los maestros valientes, con las mujeres luchadoras, con los estudiantes rebeldes, con los campesinos audaces, con los activistas incansables. No escribía sobre ellos: era parte de ellos.

Estudió un tiempo Ingeniería Civil en la UNI, pero luego se trasladó a San Marcos para seguir Economía y Periodismo. Había sentido el palpito de que su tarea era transformar la realidad peleando con la pluma contra las sabandijas de siempre, en la ruta trazada por su referente Carlos Malpica, autor del libro *Los dueños del Perú* aparecido en 1965.

Si aún estuviera entre nosotros, estoy seguro de que, en estos tiempos recios, seguiría empeñado en decirles sus verdades a los compradores de silencios de Real Plaza Trujillo; nos revelaría qué grupos económicos se llevaron la mejor tajada en la construcción del nuevo aeropuerto; nos entregaría una lista de los dueños del Perú que, como los Romero, hoy sacan su dinero del país.

No dejaría de denunciar las maniobras de Boluarte para librarse de la cárcel, ni las movidas del matón Santiváñez para blindar a los secuaces de la que va a Palacio. Estaría presente en los plantones contra la amnistía de los asesinos, en los conversatorios estudiantiles, en las marchas simbólicas por la paz en Gaza. Confrontaría a Cerrón, a Gusano y a todos aquellos que, llamándose de izquierda, pactan sin pudor con Keiko Fujimori.

Conoció a Raúl Wiener en julio del año 2007, cuando César Lévano convocaba periodistas para acompañarlo en el relanzamiento de *La Primera*, diario que pronto se convirtió en la principal voz opositora frente al segundo faenón de Alan García, quien había vencido a

Ollanta Humala en la segunda vuelta de junio del 2006.

En las primeras reuniones de coordinación editorial, Raúl Wiener me miraba con gesto serio, casi como si estuviera enojado. Pero yo sabía que las apariencias engañan, igual que los políticos. Pronto nos hicimos amigos: compartíamos afinidades en política



Raúl Wiener: una década sin su cruzada contra la derecha envalentonada.

y en literatura, y descubrí que aquel rostro de columnista irascible era solo una careta, detrás de la cual había un hombre sensible y generoso.

Participamos juntos en el proyecto dirigido por César Lévano, quien había reunido a varios colegas destacados que pensaban distinto a los periodistas de los medios tradicionales. *La Primera* funcionaba bien con una dinámica singular: seis días a la semana, el lector encontraba en la página 2 la columna de Lévano, en la página 4 la de César Hildebrandt y en la página 6 la de Raúl Wiener.

Cuando llegó a *La Primera*, Raúl Wiener tenía ya una vasta experiencia. Forjado en los medios de izquierda, con la disciplina adquirida en su militancia política, sabía aprovechar cualquier espacio para combatir a la mafia de Fujimori y Montesinos, que saqueaba tal como lo están haciendo ahora los cómplices de Dina Boluarte.

Cuando aún era universitario, yo leía las columnas de Raúl Wiener en el com-

bativo diario *Liberación*, dirigido por César Hildebrandt, quien tenía claro que su misión era contribuir a liberar al país de la mafia fujimontesinista. Gracias a César Hildebrandt, Raúl Wiener publicaba también en este semanario.

Desde los tiempos de *Liberación* seguí de cerca la trayectoria pública de Raúl Wiener. Su línea política se mantuvo firme hasta que una maldita enfermedad lo apartó de la batalla dos meses antes de que cumpliera 66 años, el 5 de setiembre del 2015, hace exactamente diez años. En esos meses finales, sus compañeros fuimos testigos de su valentía: luchaba contra la enfermedad sin abandonar la pelea contra los corruptos. Quiso publicar hasta el último día.

Es cierto que Raúl Wiener apoyó a Ollanta Humala desde el periodismo, es conocido también que lo asesoraba desde antes de que Humala lanzara su candidatura presidencial. Pero Raúl Wiener siguió en su línea cuando Humala se convertía en un Cosito traidor.

Publicó varios libros, entre ellos *La venta sucia. La privatización de Petroperú como fraude a la nación* (1996) y *Fe de ratas. Historias de corrupción* (2011). Sin embargo, quizá la obra donde desplegó con mayor contundencia su talento fue *Bandido Fujimori*. En la página 509 de la segunda edición, publicada en 2001, Raúl Wiener concluye, tras hacer una radiografía de la dictadura del padre y del tío de Keiko:

"El país que despierta del régimen más nefasto de su historia debe obligatoriamente aprender la lección de lo que significa un gobierno sin controles. Es decir, debe concluir que, en nuestra ausencia, pasividad, indiferencia, están las principales claves de lo que ha pasado. Fujimori está políticamente

muerto. Pero el Estado y la sociedad peruana: ¿han logrado realmente desfujimorizarse?"

Don Raúl, el fujimorismo anda envalentonado. Sin pudor, los herederos de Montesinos decretan que las adquisiciones y contratos de mantenimiento o repotenciación en el Ejército no pueden ser fiscalizados; casi toda la prensa tradicional trata a Boluarte como si sus gerentes hubieran pasado por la salita de muebles negros de Montesinos; los congresistas de ahora son más caraduras que Alberto Kouri, aquel del video que sustrajo Matilde Pinchi Pinchi; y Keiko, con la máscara de Boluarte, casi tiene el control de todo el Estado y se frota las manos creyendo que se salvará de la cárcel.

Don Raúl, se extraña su risa estentórea, su amistad y su lucha. Pienso en usted y recuerdo una frase de César Lévano: "Uno se ratifica en la convicción de que sólo un hombre feliz pueda luchar plenamente por la felicidad de los otros". ■

SIGUIÓ EN SU LÍNEA CUANDO HUMALA SE CONVERTÍA EN UN COSITO TRAIADOR

Una reclusión injusta



JUAN MANUEL ROBLES

Betssy Chávez la hizo linda. Hasta hace unas semanas, era una figura absolutamente abandonada a su suerte: presa, derrotada y sin voz. No solo eso, era un cadáver político y a nadie parecía afectarle; el mensaje tácito era: se pasó de lisa y tuvo su merecido. Insignificante, descartable. Al igual con Castillo, el "golpe" se asumió simbólicamente como un alzamiento armado faltoso, algo que permitió darle a ella el trato no solo de delincuente sino de casi subversiva, paria. Solo así se explica que en esos meses Betssy Chávez saliera demacrada, físicamente dañada y hasta visiblemente golpeada y no hubiera protesta o llamado de atención en los medios. Con ella, dado lo que había hecho y lo que había representado, la cosa era simple: que se joda.

Pero entonces, la huelga de hambre. Al principio la medida de fuerza no despertó mayor empatía ni menos solidaridad. La trataron de farsante, de loca, la acusaron de victimizarse y los pocos que le creyeron la tildaron de salvaje, pues solo salvajes pueden dejar de comer para dar un mensaje y probar un punto. Incluso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sacó un informe ambiguo, y con eso los progresistas tuvieron licencia para tratarla con la displicencia de siempre. Pero el tema fue escalando. La huelga de hambre iba en serio y se volvió huelga seca; la vida de esta mujer estaba en peligro.

No quiero parecer frívolo, pero qué refrescante para la política peruana, llena de zánganos sin coraje, de tipos que se blindan y protegen sus privilegios mal habidos, fue que una exfuncionaria amenace a todos con prenderse fuego si no la tratan con la dignidad elemental que merece un preso, y para llamar la atención sobre una reclusión injusta. Nos descuadró a todos. Estoy seguro de que despertó adhesiones silenciosas —no declaradas—, mientras la animadversión oficial continuaba,

con las muletillas históricas que ya conocemos.

Pero el martes, con el fallo del Tribunal Constitucional que liberó a la exprimera ministra de Castillo, algo cambió. Porque aunque puedan elaborarse un montón de teorías de



Raúl Noblella: sus argumentos se desoyeron en bloque.

conspiración sobre por qué un órgano controlado por el fujimorismo hizo lo que hizo, el fallo es, primero que nada y sobre todas las cosas, un veredicto justo frente a una arbitrariedad indefendible. La extensión de la prisión preventiva fue ilegal, solo posible por el abuso político. Los argumentos que se leen en la sentencia son los que ha venido diciendo el abogado de Chávez, Raúl Noblella, en diversos medios, desde hace meses. Pero nadie le hizo caso porque bueno, esa señora, Betssy Betzabet, se lo buscó.

Hay una cuenta de parodia de Betssy Chávez en Twitter. Es divertida porque es una caricatura

de su tono: ahorada, altanera, algo fresca. Leerla en estos días me ha hecho pensar en lo que se debe estar matando de risa por su libertad. Y sabe que, hoy más que nunca, los que la metieron allí son gente repudiada por todo el Perú.

La simpatía por Betssy Chávez crece. Hablemos claro. Esa mujer, si algo hizo, fue conspirar con Castillo para disolver un Parlamento de delinquentes, que estaba a punto de sacar al presidente porque se les daba la gana. A la distancia, a cada vez más gente le queda claro que si había que interrumpir algún mandato ese era el del Congreso. Un Congreso que merecía no continuar, y que no hubiera provocado ninguna protesta en su defensa. ¿Quién repudia a Betssy Chávez? Los fascistas y los racistas, los que la terruquean, y también los correctos que abogan por una institucionalidad que en el Perú se quebró hace rato con aberrantes cambios constitucionales, muchísimo más de lo que hubiera ocurrido si el golpe prosperaba. Nadie cree que Betssy Chávez haya cometido un delito grave, nadie la puede ver como un monstruo.

Y por si fuera poco, el arco de su historia es una fábula de superación frente a la adversidad, pequeña pero potente. Volver a levantarse después de caer lo más hondo; carcelaría sin sentencia, el Perú real en el cuerpo. ¿Cuántos tendrían la fuerza para luchar si el gobierno te persigue, si casi todos los medios te atacan y los demás, simplemente, te ignoran? Betssy Chávez nos ha recordado que en nuestro país se mantienen preso sin sentencia. Han tratado de ridiculizarla con el chisme de una supuesta amante en el penal, pero eso no hace más que darle color a su historia, y a ella, humanidad. La celda de Betssy, llena de colores, no es como el cine Tauro de Muñante, tan oscuro.

Cuando la persecución contra Betssy Chávez se hacía feroz y crecía la posibilidad de que la llevaran a prisión, ella dio una entrevista en la que dijo que no le tenía miedo a la cárcel, citando las vidas de Mandela y Mujica. Okey: le quedan grandes esos referentes pero a mí me gusta que la gente de izquierda cite a luchadores sociales, personas que conocieron el sacrificio y el estigma. "Si quieren hacerme presidenciable, ya saben lo que tienen que hacer", dijo esa vez. No creo que sea para tanto pero definitivamente hoy la soltura con la que Betssy Chávez puede salir a la calle, mirar a la gente, saludarla, es muy grande. No como otras. ■

LA EXTENSIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA FUE ILEGAL, SOLO POSIBLE POR EL ABUSO POLÍTICO

No a la intervención militar



RODOLFO
SÁNCHEZ-AIZCORBE

Nicolás Maduro es un presidente ilegítimo y un dictador. No solo eso. Maduro ha conducido a Venezuela a una debacle económica que ha forzado a millones de venezolanos a huir del país. Por donde se le mire, el "socialismo del siglo XXI" ha sido un completo desastre. Nada queda ya de las esperanzas que generó a principios de los años 2000.

Además, la corrupción campea. El régimen ya no se sostiene, como en el pasado, por el genuino apoyo popular y los amplios programas sociales. Ahora se sostiene fundamentalmente en base a un clientelismo más reducido y a las prebendas otorgadas a los militares y a las fuerzas de seguridad. Sin el apoyo de la mayoría de la población, su sostén es ahora la fuerza.

Pero ello no significa que sea legítima o conveniente una intervención militar estadounidense.

En primer lugar, está la barrera del derecho internacional. Según la Carta de la ONU, un Estado sólo puede emplear la fuerza militar contra otro

Estado en defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad. Tal disposición de la ONU claramente no cubre la pretensión de derrocar gobiernos de otros países por medio de intervenciones militares.

La ilegitimidad de un gobierno o su carácter no democrático no es justificación válida para una intervención militar. Tampoco representa Venezuela una amenaza para EE.UU. Si bien existen vínculos con el narcotráfico en las altas esferas del poder, la acusación de que Maduro es el líder de un cártel "narco-terrorista" no tiene mayor asidero.

El derecho internacional no es una formalidad que se puede dejar de lado para conseguir un fin considerado positivo. Si se normaliza la vulneración del derecho internacional y se permite que la decisión de iniciar una guerra se deje al criterio discrecional de cualquier Estado, ello podría incentivar aún más guerras y la anarquía internacional.

Pero, más allá del derecho, cabe preguntarse si una intervención mi-

litar en Venezuela conseguiría lo que se propone. Señalemos primero que la intervención puede ser de dos tipos: limitada, con ataques puntuales a la distancia para intentar descabezar el gobierno, o una invasión terrestre que implicaría el envío de decenas de miles de soldados.

En el primer caso, eliminar a Maduro y algunos altos funcionarios no garantiza un cambio de régimen. Los militares son parte del sistema del que obtienen prebendas, y comparten los temores respecto a que un cambio de gobierno les haría perder esos beneficios (además de la probabilidad de ser enjuiciados por los crímenes de los que son cómplices).

Además, de producirse la intervención, no hay forma de anticipar si los mandos medios (los jefes inmediatos de las tropas) se mantendrían alineados con el régimen o si aprovecharían la circunstancia para encabezar un golpe contra la cúpula gobernante. Si ocurre lo primero, los líderes asesinados serían simplemente reemplazados y el gobierno se sostendría.

En el caso de una invasión terrestre, experiencias recientes (Irak o Afganistán) muestran que es más fácil derrocar un régimen que construir luego un orden alternativo estable. Aun suponiendo que las fuerzas armadas venezolanas no estuvieran dispuestas a combatir, su probable colapso y fragmentación podría tener graves consecuencias.

Por ejemplo, las armas del ejército podrían ser vendidas por sus miembros a las bandas del crimen organizado. Incluso, muchos militares podrían considerar (si creen que lo han perdido todo) pasarse ellos mismos a integrar esas bandas o, en el caso de querer realizar una resistencia localizada a las tropas de ocupación, formar guerrillas en zonas poco accesibles.

El líder más sensato de la oposición venezolana, Henrique Capriles, ha sido claro en rechazar cualquier intervención militar. Capriles, quien en las elecciones presidenciales de 2012 representó un serio desafío para la reelección de Hugo Chávez, apuesta por una transición pacífica por medio de la presión, la negociación y la participación política.

Capriles sugiere que se debe combinar la presión y la negociación (reducción de sanciones a cambio de apertura, ofrecimientos a los militares a cambio de que abandonen al régimen), junto a la participación unida de la oposición en elecciones (aun si estas son robadas) porque moviliza al pueblo y pone en evidencia la impopularidad e insostenibilidad del régimen. ■

Los jueves a las 5



MAR PÉREZ

Frente al Palacio de Injusticia nos vamos congregando. Los policías formados sobre los escalones tienen tanto frío como nosotras. Las primeras en llegar son las compañeras de Cantuta. Una niña con ojos muy brillantes llega de la mano de su padre. Viene Milagros con la bandera de Palestina. Su hermano Marco estudiaba medicina en Juliaca y murió ayudando a otros. Gaela llega con unas imponentes mujeres trans. Elisabeth está con sus hijos. Su hermano Víctor fue asesinado a pocas cuadras del Congreso en enero del 2023. Un grupo de castillistas baja desde la plaza San Martín con una foto de Betssy Chávez. Está el popular Galleta, siempre combativo. Las mujeres de Marea Roja desfilan vestidas de negro y con balanzas en la mano. Van de luto porque la Justicia ha muerto en este

país. Los transportistas se suman. A ellos los está matando también este gobierno criminal.

Algunos metros más allá, unos muchachos bailan *huaylarsh*. No importa que ni nos miren, nosotros estaremos aquí todos los jueves, hasta que esa ley oprobiosa sea derogada. Gisela habla de esperanza y de unidad. Me llamarán idiota, pero estas dos horas me dan fuerza para seguir el resto de la semana.

Hace ya cinco siglos la desunión y un pequeño grupo de invasores llegados del otro lado del océano tuvieron la capacidad de sojuzgar a un pueblo entero. Esta dominación fue posible solo por las divisiones dentro del territorio ocupado. La lucha fratricida entre Huáscar y Atahualpa favoreció la imposición de un sistema que oprimió a los pueblos y saqueó sus recursos. Un sistema del que la República sigue siendo heredera.

Cuando ocurrió el Baguazo en el 2009 muchos opinólogos descubrieron de repente que los pueblos indígenas eran un actor político en este país y brotaron como setas los espacios de discusión sobre la Amazonía. Un viejo líder de izquierda aventuró que las divisiones dentro del movimiento indígena se explicaban por la existencia de clanes familiares. ¿Y cómo sería en el caso de la izquierda, compañero? -le pregunté.

Las cosas no han cambiado desde entonces. La izquierda es un todos contra todos, una cancha irrelevante donde se disputan las migajas del apoyo popular. Todos se reputan la verdadera izquierda y en su pureza están condenados a la intrascendencia. Mientras tanto, las mafias se mueren de risa.

Se necesita una izquierda a la altura de la dramática situación que atraviesa el país. Una izquierda responsable

que sepa dejar de lado diferencias insignificantes en este momento de debacle. Hemos cruzado límites que parecían imposibles: 65 choferes y dos periodistas asesinados en lo que va del año, el anuncio de la salida del sistema interamericano, la casi aniquilación de la separación de poderes y un Estado cada vez más incapaz de garantizar un nivel de vida digno a la ciudadanía. Eso lo saben bien los seis de cada diez peruanos que son pobres o están en riesgo de caer en la pobreza.

Más allá de la izquierda, sin duda se puede coordinar para enfrentar la inseguridad, una lacra que impacta a toda la ciudadanía. Siempre y cuando no vayamos por la senda de la bukeización, esa distopía de jóvenes encarcelados solo por ser pobres, estados de emergencia y despliegues de las fuerzas armadas, encarcelamiento de quienes se atreven a cuestionar los atropellos del régimen, fotografías penitenciarias armadas en una agencia de publicidad.

Este barco llamado Perú hace agua por todas partes. La única forma de salir adelante es remar en la misma dirección. Por el momento nos quedan los jueves a las cinco, frente al Palacio de Justicia. Acompañanos si puedes. Hasta que la Justicia se haga costumbre. ■

Adiós a la OCDE



RONALD GAMARRA

El gobierno, tomando la antorcha levantada por el pacto mafioso del Congreso, está dando pasos concretos para repudiar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, tratado fundamental sobre protección de los derechos humanos asumido por todos los países del continente con excepción de dos dictaduras: Venezuela y Nicaragua. El gobierno y la espuria mayoría congresal quieren que nuestro país sea el tercero de esos Estados paria. Les importa un comino el estatus y el prestigio del Perú en el concierto internacional. Son absolutamente incapaces de ver más allá de sus intereses inmediatos.

No más jurisdicción supranacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ignorantes y patanes como son, están convencidos de que con esa movida se sustraen al escrutinio internacional sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Del escrutinio nacional no se preocupan porque para eso están armando el tinglado de una dictadura encubierta bajo formas democráticas absolutamente falsificadas e hipócritas. Pero sucede que los efectos serán exactamente al revés. ¿Qué esperan obtener una vez que repudien el Pacto de San José? ¿Congratulaciones y aplausos de los países del hemisferio y del resto del mundo? Ni siquiera los van a felicitar los gobiernos parias de Venezuela y Nicaragua.

Será todo lo contrario. Solamente atraerán sobre sí la atención indignada y el desprecio de toda la comunidad democrática internacional. Denunciar entonces sus abusos contra los derechos humanos será facilísimo para quienes nos oponemos a los latrocinios perpetrados contra la democracia y el Estado de derecho por este gobierno y este Congreso del hampa. Bastará con recordar, cada vez que sea necesario, que este régimen bárbaro que se atreve a repudiar el tratado fundamental so-

bre derechos humanos de la región es el mismo que da amnistía a crímenes de lesa humanidad y que dio muerte a 50 peruanos en manifestaciones de protesta disparándoles a matar con armamento de guerra. Y no podrán culpar por ello sino a su propia torpeza.

Por supuesto que a los peruanos nos harán daño en el corto plazo. Porque nos arrancarán de facto el derecho, reconocido en dos constituciones sucesivas, a recurrir ante la jurisdicción

internacional frente a los abusos que no encuentran justicia en el país, y mediante esa aberración jurídica recortarán nuestros derechos fundamentales, como ya lo están haciendo con la democracia y el Estado de derecho porque saben bien que para imponer su posición pro caverna y garrote tienen que someter también al Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero eso, si sucede, sólo podrá imponerse en el muy corto plazo. Más allá de lo inmediato, el



Dina Boluarte y Elmer Schialer: la mandataria que ignora y el canciller que finge ignorar.

tiempo, el derecho y el contexto corren en su contra y caerán, como les ocurrió a Fujimori y Montesinos.

De manera que no pretendan impresionarnos e intimidarnos con su aparatoso grupo de trabajo multisectorial encargado de formular una propuesta de ley de soberanía nacional, que sería la justificación jurídica para repudiar el Pacto de San José. Grupo de trabajo que solo es multisectorial de nombre, puesto que seis de sus ocho miembros serán designados por las fuerzas armadas mientras que la presidencia del grupo le corresponderá al general que ejerce como ministro de Defensa. Qué manera tan torpe de hacer evidente ante el mundo entero el carácter autoritario y antidemocrático de la maniobra en marcha para pisotear el Pacto de San José.

Pero el daño al país no solo será en el ámbito de los derechos fundamentales. El pueblo peruano verá mermadas sus posibilidades de desarrollo socioeconómico si se consume el propósito del pacto mafioso de convertirnos en un

Estado paria al poner a nuestro país al margen del sistema interamericano de derechos humanos. Pongamos un solo ejemplo: el ingreso del Perú a la OCDE, el club de los países más prósperos del mundo. Esta incorporación está en trámite para que el país adquiera la condición de socio. Pertenecer a este foro nos abriría muchas puertas y ampliaría nuestras posibilidades de desarrollo. Pues bien, con el régimen declarando su repudio al Pacto de San José, bien podemos despedirnos de toda oportunidad de ser aceptados en la OCDE.

Porque requisito fundamental para ingresar a este club de países desarrollados, que invita a algunos países que aún no lo son, es tener un compromiso claro con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. La OCDE ya ha formulado hace años una serie de observaciones sobre mejoras que nuestro país debía hacer en su ordenamiento interno para poder ser admitido. Pues bien, con la patada que pretenden dar al Pacto de San José y a la Corte IDH, de ninguna manera seremos admitidos. Esta maniobra es enormemente dañina para el desarrollo y el bienestar del país. Mientras tanto, Colombia y Chile ya pertenecen a la OCDE y nos sacarán cada vez más ventaja. ¿Está claro qué daño se nos hace incluso en nuestro nivel de vida?

Torre Tagle tiene una burocracia enterada de todo esto.

Sin embargo, también contribuye activamente a consumir el estropicio. Lo demuestra el canciller Elmer Schialer al declarar que el sistema interamericano de derechos humanos, regido por la Corte IDH, "ya no responde a la realidad del Perú" y que sus resoluciones y recomendaciones "no se condicen con la realidad" de nuestro país. ¿Cuál sería esa nueva realidad? ¿Somos acaso ahora un país plenamente democrático donde reina la justicia? Pues entonces, con mayor razón, deberíamos respetar el Pacto y el sistema interamericano de derechos humanos en lugar de repudiarlo. Y recordar, por ejemplo, que los países de la Unión Europea, que tienen democracias prósperas y Estados de derecho envidiables, aceptan voluntariamente y acatan la jurisdicción de los tribunales internacionales y en primer lugar los de su región, y no solo en materia de derechos humanos. Schialer sabe muy bien todo esto, pero qué le importa, chamba es chamba, y él está dispuesto a cualquier cosa para conservar su sueldo y su estatus. ■

TORRE TAGLE TIENE UNA BUROCRACIA ENTERADA DE TODO ESTO

Narcosis sigue sonando



PEDRO CASUSOL

Vengo del concierto por los cuarenta años de Narcosis, leyenda del rock subterráneo, y la aparición de su maqueta "Primera dosis", un verdadero ícono de resistencia cultural, de espíritu punk y gritos destemplados. La cita fue el sábado en el viejo teatro Leguía en el centro de Lima, un recinto oscuro donde se reunió lo que queda de aquella generación que vivió su juventud en los convulsos años ochenta.

Adentro, el auditorio reboaba de sombras. Barrigas y barbas desprolijas, predominaba el color negro en la vestimenta. La impaciencia dejaba charcos de cerveza por doquier. Al promediar las doce, el escenario se tiñó de rojo con el "Intro" de "Primera dosis" para dar paso a Wicho García, Pelo Madueño y Javier Chunga (este último en reemplazo de Fernando Vial, apodado "Cachorro", quien falleciera durante la pandemia). Arrancaron. "¡La peste rodea tu cabeza / Y no te deja libre...!".

La banda, a inicios de 1984, tenía otro nombre y otro vocalista, hasta que "Cachorro" se decantó por Narcosis. Según él, inspirado en un pasaje del "Siddhartha" de Hesse: "Se trata solo de huir del Yo. Es un breve escaparse del Yo, una breve narcosis contra el dolor...". En noviembre de ese mismo año, había conseguido asegurar la participación de Narcosis en un concierto en La Palizada. Solo había un problema: el vocalista debía de hacer su confirmación religiosa ese día. "Cachorro" acudió entonces a un amigo con el que intercambiaba discos desde 1979.

Wicho preguntó: ¿De qué va la onda? Punk, le respondió "Cachorro". La idea era ser un invitado, cantar las versiones originales de temas como "Súcio policía" y "La peste",

dos de los himnos de Narcosis. Sabía que Wicho podía interpretar sus canciones, cantarlas con un registro adecuado. Hazme la taba, le insistió.

El 17 de noviembre, Wicho García acudió a La Palizada para ensayar y tocar por primera vez con Narcosis, apoyado con un papelito. Ahí conoció a un muchacho con uniforme de colegio y casaca de cuero que toca-

nales con una mezcladora incorporada que había comprado en La Cachina.

Otra condición fue que le dejaran darle una estructura a las canciones, que parecían carecer de principio y de final. La idea era que tuvieran un mensaje claro y conforme se fueron grabando se dieron cuenta de que eran el vehículo perfecto para expresar toda la rabia y catarsis de su generación: el olor a pólvora y a "cochebomba" que impregnaba la atmósfera de la década de los ochenta.

La base se grabó en una semana en la casa de Pelo Madueño y después en el cuarto de Wicho, quien terminó de armar artesanalmente ese conjunto de trece canciones que sonaban como un escupitajo en la cara del *establishment* y del "deber ser".

El 17 de febrero de 1985, antes de que vieran la luz los casetes de "Primera dosis", Narcosis se presentó en el concierto "Rock en río Rímac" gracias a la intermediación de la banda Leuzemia. Ante cinco mil personas, en un tabladillo en el cruce de Tarapacá con Guardia Republicana, en pleno domingo de sol y con globos de agua cayendo sobre los equipos de música, el trío decidió tocar "Súcio policía", pese a la nutrida presencia de agentes entre la multitud. ¿El resultado? La canción súbitamente inte-

rumpida, disparos al aire, policías forcejeando con los músicos y el público enardecido: "¡Súcio policía verde...!".

Pienso en todo esto mientras regreso del concierto de Narcosis. Ya han pasado cuarenta años desde que aparecieron estas canciones oscuras y rabiosas que retratan el desastre al que llamamos Perú, con letras como: "Hay mucho movimiento, pero todo está muerto / La gente no se da cuenta que camina sobre ruinas / La ciudad se me echa encima, toda esta mierda me asfixia...". Narcosis, como banda, no duró más de siete meses. Pero dejó la huella indeleble de un inconformismo que deberían de envidiar los jóvenes de hoy, atontados por el algoritmo, que piensan que hacer patria es votar por el chicharrón en el concurso de algún *influencer* idiota. Y ya no digo más porque me enfermo del hígado, como diría El Rosquita (otro tipo de rebelde, el de "Los inocentes" de Reynoso). ■



Pelo Madueño y Wicho García: 40 años de leyenda.

ba la batería: era Pelo Madueño. El concierto fue un desmadre. Pura bulla, equipos de música vomitando acordes y letras rabiosas. Wicho seguía las indicaciones: cantar como Johnny Rotten, vocalista de la banda Sex Pistols. Aquella fue la primera vez que presencié un "pogo".

Quedó afónico tras el concierto en La Palizada, pero había valido la pena. Narcosis tenía algo especial. Sus canciones eran agresivas, ruidosas, contestatarias, con un sonido crudo y básico. Era solo guitarra, batería y voz. El punk le parecía algo obsoleto, pero en aquella época andaba como perdido, buscando encontrar su propio camino en el mundo de la música. Cuando "Cachorro" se le acercó para invitarlo formalmente a ser el nuevo vocalista de la banda, Wicho aceptó con la condición de que le permitieran producir y mezclar lo que luego sería la maqueta "Primera dosis". Tenía una grabadora de cuatro ca-

AQUELLA FUE LA PRIMERA VEZ QUE PRESENCIÓ UN "POGO"

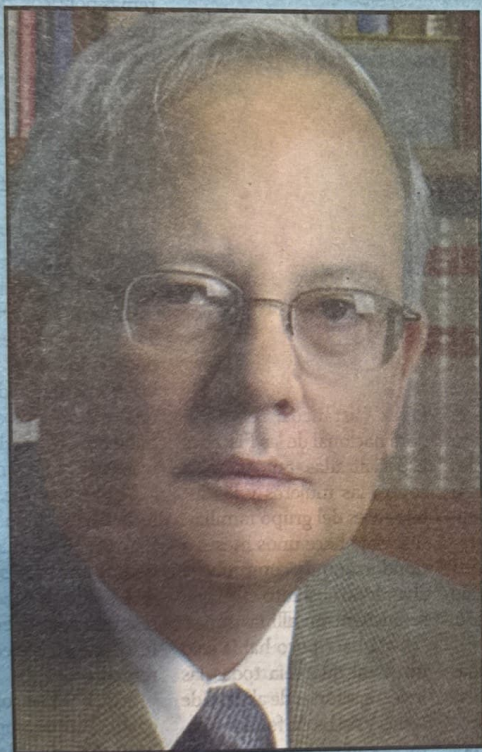
HILDEBRANDT

en sus trece

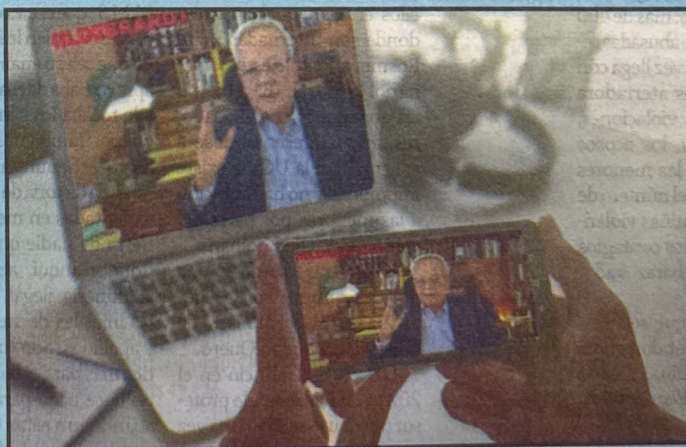
¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!

Todos los lunes, antes de las **9 DE LA NOCHE**, siga en vivo el Podcast de César Hildebrandt

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
219,520 suscriptores
y ha sumado
29'006,305 vistas



Fronteras de abandono

► En lo que va del año, más de 30 niños han muerto de tos ferina en la provincia del Datem del Marañón en Loreto, mientras que en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, 9 niñas se han suicidado después de sufrir abuso sexual por unos sujetos que se hacen llamar docentes

SONIA SUYÓN

La lista de los depredadores y abusadores de niñas, disfrazados de profesores, en Condorcanqui, es larga y sigue en aumento. Son 13 páginas. Casi 400 denunciados, varios reincidentes. Pero la cifra es engañosa. Ahí están sólo los nombres que revelaron aquellas niñas que pudieron levantarse del dolor y la angustia. Hay muchas a las que el miedo les impide contar sus historias. Y hay otras más que alcanzaron a denunciar a sus agresores, pero decidieron irse para siempre porque ya les habían destrozado la vida. Rosmery Poic es la maestra awajún que el año pasado llegó a Lima a contar la tragedia de sus comunidades: más de 400 niñas habían sido abusadas sexualmente. Esta vez llega con otra noticia más aterradora aún: siguen las violaciones, los tocamientos, los acosos sexuales contra las menores y crece también el número de suicidios de las niñas violentadas, también los contagios por VIH y los embarazos adolescentes.

La distancia que separa a las niñas de Condorcanqui del gobierno de Dina Boluarte parece infinita. Peor aún, ella les da la espalda y les quita el presupuesto a las fiscalías que investigan esos casos.

"Son nueve las niñas y adolescentes que se quitaron

Familia angustiada por un niño enfermo de tos ferina en Datem del Marañón.



la vida después de denunciar a sus agresores, que eran sus propios docentes o vivían con ellos en las escuelas rurales donde son internadas", dice Rosmery Poic a este seminario. Y agrega: "El gobierno las abandonó. Los abusadores siguen presentándose a concurso en la UGEL, existe impunidad y no hay atención a las menores por parte del gobierno de Dina Boluarte".

Y esta tragedia no es una práctica cultural, como alguna vez sostuvo el ministro de Educación Morgan Quero.

L.H.Ch.Y. denunció en el 2024 a un mal llamado profesor por abuso sexual. Una vez enterada, la esposa del agresor cargó contra la niña y la buscó para insultarla y maltratarla. Este año la pequeña abusada,

insultada y lastimada, decidió tomar lejía y acabar con su vida. Otra menor de iniciales M.M.S., que era acosada por su profesor, quien le había pedido que sea su enamorada y se aprovechaba de ella y la besaba y le tocaba los senos cuando quería, también se suicidó, luego de denunciarlo.

Cada historia de estas niñas violentadas en medio de esa tierra de nadie que se llama Condorcanqui, azotada por la minería ilegal, lleva sólo las iniciales de sus nombres y apellidos. Son una estadística más para el gobierno que no hace nada para sacar del abandono a estas niñas atrapadas en ese ciclo de violencia interminable.

"Condorcanqui duele", dice la fiscal superior Jacqueline

Pérez Castañeda, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Ella viajó hace unos meses a Condorcanqui y comprobó el abandono absoluto en el que se encuentran allí las niñas. "Hasta hace poco había sólo un fiscal que veía todas las investigaciones de abusos de niñas y casos de feminicidio, estaba en turno permanente todos los días", añade Pérez. En total, hay en Condorcanqui más de 800 carpetas fiscales abiertas, de las cuales cerca del 50% son casos de delitos relacionados con agresiones sexuales contra menores, donde están involucrados profesores y personal administrativo de la UGEL. "En los distritos de

Yutupis y Huampami no hay policías. Sin policías es imposible supervisar las medidas de protección a favor de las víctimas. Hay un abandono total. La presencia del Estado ahí es nula", apunta la fiscal Pérez, quien denuncia, además, que el gobierno de Dina Boluarte niega sistemáticamente al Ministerio Público el presupuesto para atender a las niñas abusadas en esa zona.

"La primera Cámara Gesell en Condorcanqui se inauguró en noviembre de 2024 y no fue por obra del Ejecutivo, sino gracias al apoyo y financiamiento del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. Está claro que al gobierno de Dina Boluarte no le importa Condorcanqui", dice la fiscal Pérez. Y agrega que el gobierno les había ofrecido 20 millones de soles para atender la emergencia de las niñas ahí y sólo les han entregado 1 millón. "No nos dieron ni una chupeta para poder trasladarnos. Nos están asfixiando, aplastando, nos quitan presupuesto. Condorcanqui no es el foco de interés del gobierno. Por castigar a las fiscalías por temas políticos, nos reducen presupuesto. Eso afecta tremendamente a las niñas, pero a la presidenta eso no le importa nada", dice la fiscal.

Tampoco atiende el gobierno a los niños que se están muriendo de tos ferina en la provincia Datem del Marañón, en Loreto. Ya son más de 30 niños que han fallecido atrapados en esa tos convulsa, implacable. Y son más de 1,400 los menores contagiados en diferentes etnias nativas. Esta enfermedad no sería una epidemia si los pequeños hubieran recibido las vacunas respectivas. Pero ninguno de los niños víctimas de la tos ferina había sido vacunado. En esa provincia loreto, la vacunación llega sólo al 30% de los niños. Y cada año cae más la tasa, sin que el gobierno tome medidas efectivas para remediarlo.

Kuwi, Mayaco, Mashingashi, Kamarampi, Akumbari, Antich, Mashumbar, Tariri son algunos de los apellidos de los niños de la etnia Kandozi y Achuar que han fallecido por esta enfermedad que ataca principalmente a niños de 0 a 5 años. Según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, son 23

CONTINÚA EN LA PÁGINA 30

Franja de sangre

► *Prosigue la ocupación de Ciudad de Gaza mientras la soldadesca israelí continúa matando*

ELIA Y. DIZ

Israel empezó a ejecutar la invasión de Ciudad de Gaza. El viernes de la semana pasada la declaró "zona de combate peligrosa". Drones con altavoces sobrevolaron los vecindarios de la ciudad ordenando la evacuación inmediata de los habitantes. Desde las naves teledirigidas lanzaron panfletos advirtiendo que matarán a aquellos que se queden. Ciudad de Gaza ocupa un área de 45 km cuadrados en la que se concentra casi la mitad de la población de la Franja. Desde entonces, la escasa ayuda humanitaria que Israel permitía ingresar se volvió a suspender. Y el número de muertos se multiplicó.

"Diría que nos tratan como perros, pero a los perros los tratan mejor", dijo Mohamed Maalouf, un ciudadano de Ciudad de Gaza, al corresponsal de Associated Press. El viernes Maalouf, su mujer y sus ocho niños partieron a pie rumbo al sur de la Franja. Como la mayoría de gazatíes, la familia Maalouf ya había sido desplazada antes.

A principios de año, durante el falso "alto al fuego", decidieron arriesgarse y volver a casa. Encontraron su hogar destruido. Desde entonces, narra el hombre mirando a la cámara, viven en las calles.

"Es imposible evacuar Ciudad de Gaza de manera segura y digna", denunció el viernes la presidenta de la Comisión Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric. A Israel le da igual.

"La destrucción generalizada de infraestructura civil y

la escasez extrema de comida, agua, refugio y atención médica implica que no hay zona de la Franja capaz de absorber tal desplazamiento masivo de personas", señaló el comunicado oficial de la Cruz Roja.

Israel respondió a las denuncias de las organizaciones humanitarias el sábado



Funeral de las víctimas del bombardeo israelí contra el barrio Nasr, Ciudad de Gaza, este 30 de agosto. (FOTO: Khames Alrefi/Anadolu vía Getty Images)

30. Asesinó a 77 gazatíes en aquella jornada.

Empezaron matando a tiros a 11 personas, incluidos tres niños, mientras hacían cola para recibir alimentos. Bombardearon tres veces un mismo edificio, en el corazón de Ciudad de Gaza. De los escombros se pudo rescatar siete cadáveres. También bombardearon la panadería comunitaria de la calle Al-Nasr, que se había convertido en refugio improvisado de decenas de gazatíes sin techo. Doce personas, entre ellos seis mujeres

y tres niños, murieron en el ataque.

Hace dos semanas que Hamás pidió negociar un alto al fuego. Esta semana varios medios israelíes informaron que el primer ministro Netanyahu y sus socios —entre ellos los ministros Smotrich y Ben Gvir— rechazaron la posibilidad de llevar la cuestión a voto. "No es necesario votar porque [el alto al fuego] no es una opción", dijo Ben Gvir. La cita la recogió el periódico Ynet.

Entre el domingo 31 de agosto y el lunes primero de septiembre, Israel bombardeó las inmediaciones de un colegio de la UNRWA, atacó a un grupo de civiles que estaban reunidos en el vecindario Sheikh Radwan y embistió desde el aire el vecindario Shuja'iyya. Y a los cadáveres mutilados por la metralla se sumaron otros nueve gazatíes

Fuad Tafesh, estoy atrapado entre el fuego y las bombas. ¡Por favor, estoy atrapado con mis cuatro niños! ¡Estoy ciego y no puedo hacer nada por ayudarlos! ¡Necesito atención médica urgente!", continuó implorando. Su rescate fue imposible. La Media Luna Roja no pudo volver a comunicarse con el hombre.

Y mientras las tropas israelíes ejecutaban la invasión del barrio de al-Zaytoun, otra brigada destruía Sheikh Radwan, uno de los vecindarios más grandes y poblados de la ciudad. Tres colegios llenos de refugiados fueron atacados a punta de granadas por un pelotón de soldados.

La posta médica del barrio fue bombardeada y las únicas dos ambulancias que quedaban fueron destruidas con misiles incendiarios.

Al día siguiente, el miérco-

maquinaria de guerra. Estas armas, advierte también Amnistía Internacional, son ilegales y su uso constituye crímenes de guerra y lesa humanidad.

El Ministerio de Salud gazatí calcula que entre el 70% y 82% de toda la infraestructura de Ciudad de Gaza ha sido destruida. Jabalia, Al-Nazla, Sheikh Radwan y al-Zaytoun han sido ocupados por el ejército sionista. Las tropas israelíes que empezaron la invasión desde el norte, sur y este ya están a pocos kilómetros de encontrarse en el centro de la ciudad, informó Reuters este miércoles.

De los 60,000 reservistas convocados para la toma de la ciudad, sólo 350 se han negado a participar en la campaña genocida. "La ocupación de Gaza es ilegal y pone en peligro a nuestros rehenes, soldados y civiles", dijo Ron Feiner, miembro del grupo Reservistas por los Rehenes, durante una conferencia de prensa esta semana.

A las 3:30 de la tarde de este jueves, hora local, al borde del cierre de esta edición, el ministerio de salud local había registrado otros 50 nuevos asesinatos en el norte de la Franja.

El campamento de refugiados improvisado en la calle Al-Nasr volvió a ser bombardeado, esta vez con misiles incendiarios. El número total de muertos es desconocido por ahora. Las carpas de refugiados en el patio del Hospital Al Shifa, donde asesinaron a 10 periodistas en las últimas dos semanas, entre ellos Anás Al-Sarif, también volvieron a ser bombardeadas pocas horas después. Y todavía queda más de media jornada por delante.

"Los que decidan quedarse serán tratados como terroristas", dijo a la emisora israelí Canal 12 el general Erez Winner. Durante la entrevista, la última semana de agosto, Winner se atribuyó haber diseñado gran parte de la operación "Carrozas de Gedeón 2", la toma de Ciudad de Gaza. "No dejaremos que nadie regrese. Son un pueblo educado desde niños para odiar a Israel. Y al final y al cabo, no hay una sola persona honrada en Gaza", terminó. ■

a los que mató el hambre. El mes de agosto la política de la hambruna impuesta por Israel en Gaza asesinó a 185 palestinos.

La mañana del martes el equipo de rescate de la Media Luna Roja de Ciudad de Gaza recibió una llamada desde el vecindario de al-Zaytoun. El barrio acababa de ser invadido por las fuerzas de ocupación. Un hombre, desesperado, suplicaba por ayuda.

"¡Estamos atrapados! ¡Hemos sido asediados!", se escuchaba decir. "Me llamo Ahmed

les, los drones se volvieron a ensañar con el barrio Sheikh Radwan. Esta vez descargaron su furia contra el mercado y las carpas, convertidas en hogares improvisados. El reporte de bajas da cuenta del asesinato de 13 palestinos, entre ellos una mujer embarazada.

El ejército, denuncia la Monitora de Derechos Humanos Euro-Med, ha empezado a utilizar un nuevo modelo de robots-bombas para la destrucción de la ciudad. Alrededor de 300 casas son derribadas a diario con esta

Lima salvaje

► El asesinato del dueño y dos empleados de una discoteca en San Juan de Lurigancho tendría que ver con la venganza de una banda de venezolanos o con los métodos "radicales" de algunos competidores

ALONSO ZAMBRANO

Saúl Cayllahua Quispe (43) era testigo en la investigación de una banda de venezolanos que se dedica a la microcomercialización de droga. El empresario fue acribillado a balazos mientras tomaba unos tragos con Braulio Asencios Collao (29) y Percy Rodríguez Huamán (45), también asesinados.

Eran las 11:30 de la noche del jueves 28 de agosto. El dueño de la discoteca *Gato Negro*, en San Juan de Lurigancho, tomaba cerveza junto a dos de sus empleados en una plazuela que está a pocos metros del local. Un sicario se aproximó por detrás de Cayllahua y le disparó en la cabeza. Murió en el acto. Asencios, administrador del local, y Rodríguez, el sonidista, trataron de escapar. El asesino les disparó por la espalda. Murieron desangrados sobre el asfalto.

La División de Homicidios de la Policía que investiga el triple asesinato maneja dos hipótesis. Una apunta a un crimen por encargo orquestado por una banda de venezolanos capturados en 2024 en una discoteca de Cayllahua. La otra línea de investigación sería por la disputa de clientes con un "empresario rival".

Cayllahua incursionó en el negocio del ocio nocturno siendo muy joven. Sus familiares cuentan que, inicialmente, se dedicaba a decorar pubs en Santa Anita, Villa El Salvador y Ventanilla.

"Desde los 20 años decoraba discotecas, pero hace ocho años uno de sus

clientes le vendió un local en el Boulevard de Zárate. Fue ahí cuando empezó a manejar su propia discoteca. Inicialmente se llamaba *Barsini*, pero luego le puso *Perú Chela*. Le fue bien y más tarde compró una segunda discoteca: *Gato Negro*", cuenta un pariente que pide el anonimato por miedo a que los asesinos tomen represalias.

Cayllahua también tenía una empresa dedicada a la elaboración de prendas de bioseguridad como mameucos, guantes y botas. Y otra compañía de refacción y decoración. "Él es socio en esas empresas, aunque estos últimos años se abocó más a sus discotecas", cuenta un pariente.

El 23 de junio de 2024 la Policía realizó un operativo en *Perú Chela* y en la redada fueron detenidos siete venezolanos y un peruano. Los clientes estaban en una zona reservada. Durante la intervención les incautaron dos armas de fuego, 1,020 ketes de pasta básica de cocaína, 12 bolsas de clorhidrato de cocaína, varios cigarrillos de marihuana y envoltorios con tusi.

Cayllahua también fue detenido. Estuvo 15 días en el calabozo. Finalmente fue liberado al no encontrarse pruebas que lo vincularan directamente con las armas o con la droga incautada.

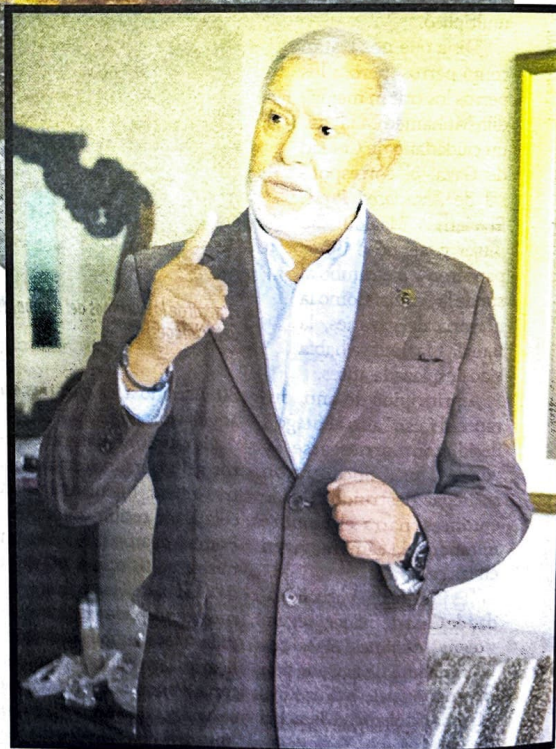
En julio de 2025 el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra los ocho detenidos. Fueron acusados de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas. Entre los reclusos estaba Víctor Osorio Díaz, quien, según medios



Los cuerpos de Saúl Cayllahua (izquierda) y Braulio Asencios (derecha). El primero era dueño de la discoteca "Gato Negro"; el segundo, su administrador.

venezolanos, purgó cárcel en el Penal de Alayón, en el Estado de Aragua, hasta el 2020.

La declaración de Cayllahua como testigo fue una de las principales evidencias presentadas por la Fiscalía. El empresario aseguró que las personas que estaban en el box solo podían estar ahí si pagaban "entradas vip" y facilitó la laptop y los registros de pago de la discoteca



"Aquí habría una clara intención de venganza contra el dueño de la discoteca por colaborar con la justicia", dice César Ortiz Anderson, presidente de Aprovechados.



Discoteca "Gato Negro", ubicada en el Boulevard de Zárate, en San Juan de Lurigancho. El triple asesinato ocurrió el jueves de la semana pasada a pocos metros de la puerta del local nocturno.



Imágenes de las cámaras de seguridad. El sicario escapa tras cometer el triple asesinato.

a la Policía.

"El contó que durante la intervención no estuvo en la discoteca, pero sí había ido horas antes", explica Dimelsa Capcha, su abogada.

"Yo me encargo de ver las barras, los baños, la zona vip y la zona de baile (...). El 22 de junio ingresé al local para atender a mis clientes por el motivo de la llegada de un DJ internacional. Luego, en horas de la madrugada, como a las 4:30 a.m., me encontré sentado al lado derecho de la barra observando a todos mis clientes, de los cuales vi como a ocho personas en la zona VIP (...) Sí, vi a varias personas y, por

temor, no puse en conocimiento de las autoridades que se estaban drogando en el establecimiento porque la mayoría eran venezolanos. (...)", declaró el empresario tras su detención.

Cuando le preguntaron si conocía a alguna de las personas que estuvieron en el salón VIP, respondió: "Solo conozco al peruano y sé que los otros siete eran venezolanos".

El connacional al que se refería es Jean Pierre Valencia Villena, sentenciado el 2023 a cuatro años de prisión suspendida por tráfico de drogas.

En abril de este año el

Poder Judicial anuló la prisión preventiva contra los ocho detenidos en el operativo policial. A inicios de agosto el Ministerio Público presentó la acusación y citó a Cayllahua como testigo clave.

"El resultado de los últimos operativos en los llamados 'bunkers' ha sido deficiente porque, increíblemente, estos grupos si no han quedado libres por la Fiscalía, han sido liberados por el Poder Judicial. Si a cualquier persona se le encuentra un arma ilegal, va presa ocho años, así lo dice la ley. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿Por qué no se van

presos? En el caso del dueño de la discoteca Gato Negro, habría una clara intención de venganza contra él por colaborar con la justicia", dice César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec).

La Policía tampoco descarta que la ejecución de Cayllahua esté vinculada a una disputa con otros empresarios discotequeros del Boulevard de Zárate.

"Todos los lunes que abro mi puesto aparece gente borracha. He visto que a veces se agarran a golpes o incluso hacen sus necesidades en la puerta de mi local", nos dice

una comerciante del mercado que está a unos 20 metros de Gato Negro.

"Nosotros clausuramos las discotecas, pero ellos las vuelven a abrir o quitan los carteles. Este Boulevard, el de Canto Grande y el de la avenida Próceres son los que concentran la mayor cantidad de discotecas en todo el distrito", dice Griselda Mendoza, fiscalizadora de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.

Los agentes a cargo de la investigación no cierran la posibilidad a que el triple homicidio tenga otro móvil. Varios de los interrogados han dicho que Cayllahua estaba enfrentado a un empresario conocido como "Marqués", dueño de locales colindantes a Gato Negro.

"El señor del costado tiene un arma y amedrenta a los comerciantes de la zona porque se cree dueño del Boulevard. Hace ocho años, cuando Saúl se hizo propietario, este empresario mandó disparar al aire en la puerta de su local para intimidarlo", cuenta un familiar.

"Hace un mes la municipalidad le cerró un local y acusó a Saúl de haberlo saboteado. En otra ocasión, mandó a romperle la cabeza a un trabajador de la discoteca y lo amenazó de muerte. (...) Hace una semana Saúl me dijo que ese señor estaba molesto porque le había quitado clientela", agrega.

Jaime Antezana, especialista en temas de seguridad, advierte que muchas bandas criminales mantienen nexos con empresarios del rubro nocturno debido a los delitos conexos que se cometen en sus locales: trata de personas, microcomercialización de drogas, venta de armas, entre otros.

"Hay alianzas entre empresarios que manejan negocios en el Boulevard de Zárate y bandas criminales que cobran cupos en la zona, como Los Malditos de San Juan de Lurigancho. Él era un empresario con dos locales en el Boulevard y estaba colaborando con la Policía. Estas bandas -explica Antezana- buscan consolidar su control en el área. Detrás de los tres homicidios hay una clara intención de acabar con su negocio". ■

Papa caliente

► Un reciente informe de la Contraloría encuentra intrusos indeseables (coliformes, bacterias, plaguicidas, cadmio y plomo) en una muestra grande de alimentos

N°	Matriz	Análisis de residuos de plaguicidas			
		N° informes	C	NC	%NC
Alimento de origen vegetal					
1	Aji amarillo	90	41	49	54.44
2	Apio	88	24	64	72.73
3	Arveja v. fresca	79	61	18	22.78
4	Arveja g. seco	16	12	4	25.00
5	Belarraga	82	48	34	41.46
6	Brócoli	83	47	36	43.37
7	Coliflor	77	53	24	31.17
8	Espárrago	220	176	44	20.00
9	Espinaca	81	19	62	76.54
10	Fresa	87	28	59	67.82
11	Granadilla	65	24	41	63.08
12	Lechuga	86	43	43	50.00
13	Lenteja	85	67	18	21.18
14	Limón	164	144	20	12.20
15	Mandarina	156	136	20	12.82
16	Mango	117	112	5	4.27
17	Manzana	175	82	93	53.14
18	Maracuyá	74	41	33	44.59
19	Melocotón	83	41	42	50.60
20	Palta	205	184	21	10.24
21	Papa	158	108	50	31.65
22	Papaya	81	46	35	43.21
23	Páprika	137	11	126	91.97
24	Pepinillo	83	73	10	12.05
25	Pimiento	84	31	53	63.10
26	Piña	83	40	43	51.81
27	Quinua	161	63	98	60.87
28	Tomate	203	129	74	36.45
29	Zanahoria	88	68	20	22.73
Alimento de origen animal					
30	Carne de bovino	186	186	0	0.00
31	Carne de caprino	43	43	0	0.00

Análisis del Senasa sobre residuos de plaguicidas muestra una lista de 19 productos en situación alarmante: la páprika, la espinaca, la quinua, el apio, el aji amarillo, entre otros.

JULIO ROSPIGLIOSI

El pan con chicharrón llega con sorpresa. El menú de los peruanos es una fusión de coliformes, bacterias, plaguicidas prohibidos y cadmio y plomo. Los monitoreos oficiales (y los no oficiales) revelan la presencia de sustancias tóxicas y cancerígenas en frutas, vegetales y leche cruda que se venden por todo el territorio peruano. Hay países que han empezado a cerrarles la puerta a varios de nuestros productos bandera.

Una reciente auditoría de la Contraloría advierte serias deficiencias en la fiscalización de plaguicidas y en la reincidencia de los comerciantes. "La auditoría lo que busca es mejorar el proceso del Senasa. Y en este caso, en específico, el proceso es un desastre", dice Luis Castillo Torrealva, subgerente de control del sector agricultura y ambiente.

Todos los años el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) analiza miles de alimentos de productores primarios, mercados mayoristas y minoristas del país. Los resultados son plasmados en un informe.

El objetivo es detectar el "límite máximo permitido" de agroquímicos presentes en la comida. Los niveles varían, según la fruta, verdura y el agroquímico, y están ajustados a las normas de la Unión Europea y Estados Unidos. Lo que daña la salud de europeos y gringos también quiebra la salud de los peruanos.

El 2024 el Senasa halló fungicidas como el mancozeb, propineb y thiram por encima del límite permitido. Según los especialistas, estos pueden causar daños neurológicos, hepáticos y renales.

También se encontró fipronilo, un acaricida que puede provocar, en casos de mucha exposición, daños al hígado y a los riñones. El fipronilo está prohibido en China, Vietnam, California y Colombia.

El Senasa también advirtió la presencia de clorpirifos, un químico que fue prohibido en nuestro país desde agosto de ese año y que, según las autoridades sanitarias, puede estar asociado a problemas neu-



"Si nos pudiéramos a controlar en qué condiciones se venden los tomates, las lechugas, el apio, prácticamente el 50% de estos alimentos no podría comercializarse", dice Jaime Delgado, coordinador del Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao.



"La auditoría lo que busca es mejorar el proceso del Senasa. Y en este caso específico, el proceso es un desastre", dice Luis Castillo Torrealva, subgerente de control del sector agricultura y ambiente de la Contraloría.

rológicos, como retraso en el desarrollo de los niños, disminución del coeficiente intelectual y trastornos del comportamiento.

"Está prohibido en el país por los efectos neurotóxicos que puede provocar", dice Jéssica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas.

Después de su prohibición, este plaguicida usado para enfrentar cucarachas, termitas, mosquitos y garrapatas fue hallado en muestras de páprika (más de 20

miligramos de clorpirifos por kilo), quinua, aji amarillo (más de 0,5 gramos por kilo) y manzana (más de 1 miligramo por kilo).

La misma sustancia prohibida fue encontrada este año en el "Monitoreo Ciudadano de Agroquímicos en Frutas y Verduras de Supermercados de Lima y Callao". Se trata de un estudio que llevan a cabo distintas organizaciones de la sociedad civil que intentan llamar la atención sobre este problema.



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN • HT3

El apio y el ají amarillo figuran como las verduras más contaminadas en el monitoreo realizado por el Senasa en 2024.

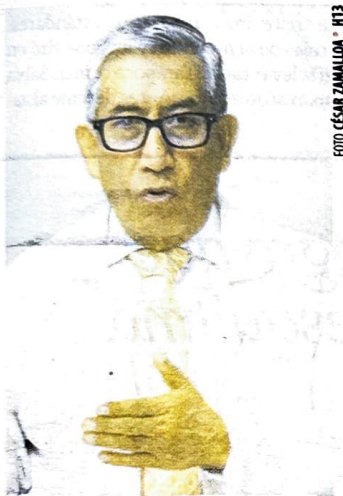


FOTO CÉSAR ZAMALLÓN • HT3

"Si la exposición a los agroquímicos es crónica, el riesgo a enfermedades oncológicas existe", dice el gastroenterólogo Juan Capcha Ramírez.



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN • HT3

"El uso de clorpirifos está prohibido en el país por los efectos neurotóxicos que puede provocar", dice Jéssica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas. El insecticida, sin embargo, sigue hallándose en algunos alimentos.



FOTO CÉSAR ZAMALLÓN • HT3

"El problema con el consumo de agroquímicos no es el corto plazo sino que es acumulativo", advierte la ingeniera alimentaria Edita Vilcapoma.

A diferencia del Senasa, que sólo recoge muestras en mercados, para este monitoreo se recogió nueve muestras entre pimientos de Wong y Plaza Vea, tomates de Tottus y ajíes amarillos también de Plaza Vea. En todos se halló rastros de clorpirifos. En los tomates, por ejemplo, en 0,07 miligramos por kilo.

"Si nos pudiéramos a controlar en qué condiciones se venden los tomates, las lechugas o el apio, prácticamente el 50% de estos alimentos no podría comercializarse", dice el abogado Jaime Delgado, coordinador del monitoreo ciudadano.

Los reportes del Senasa advierten que el caso más grave es el de la páprika, un producto de exportación. "Si tú tienes páprika en Lima, es porque ese producto no podía ser exportado. Todo agroexportador sabe eso", apunta Luis Castillo, de la Contraloría.

De las 137 muestras de páprika que analizó el Senasa en 2024, 126 superaban el límite máximo permitido por la aplicación de distintos plaguicidas. Y en 43 de esas muestras se halló, precisamente, clorpirifos. Los estudios del Senasa omiten hacer público en cuánto nos excedemos.

De los análisis que se hicieron a la espinaca, el apio, la fresa y la granadilla, entre el 63 y el 75% presentó resultados "no conformes", es decir, se superó los niveles de plaguicidas permitidos. Lo mismo ocurrió con más del 50% de la quinua, el ají amarillo, la lechuga, el melocotón y la manzana.

"Al llegar al organismo, van a modificar la microbiota de nuestro intestino. Van a producir cuadros diarreicos y una alteración en la producción de una serie de hormonas, lo que está muy relacionado a obesidad, diabetes mellitus e incluso a trastornos de conducta",

advierte el gastroenterólogo Juan Capcha Ramírez.

El cáncer también se asoma como una posibilidad. "Si la exposición es crónica, el riesgo a enfermedades oncológicas existe. Muchos de estos fungicidas van a alterar el nivel de los cromosomas y, al hacerlo, alteran la división de células. Eso es un factor que puede llevar a enfermedades tumorales no sólo a nivel intestinal", agrega Capcha.

La presencia de metales pesados fue advertida por el Senasa, principalmente en la páprika. De los 137 análisis que realizó el servicio de sanidad sobre este producto, 122 presentaban cadmio y

87 plomo en límites mayores a 0,1 y 0,05 miligramos por kilo, respectivamente. El 20% de las muestras de ají amarillo también tenía estos metales en las mismas proporciones. Las muestras se recogieron en mercados de los departamentos de San Martín, La Libertad, Áncash, Loreto e Ica.

No se salvan ni las torrijas con miel. En el 80% de las muestras de leche cruda de vaca recogidas el 2024 se detectó bacterias y coliformes en gran cantidad. A la cabeza de este ranking están Pasco, Huancavelica, Lambayeque, Lima y Callao. También se detectó moho en el 32% de las muestras de miel de abeja.

Los especialistas apuntan que hay un grave problema de trazabilidad de los productos y que no existe una vigilancia adecuada en mercados mayoristas, como el de Santa Anita. La Contraloría ha notificado varias deficiencias al Senasa.

En agosto pasado un informe del órgano de control señaló que, a pesar de que año tras año el Senasa recolecta muestras de más de 3,000 productores y establecimientos, la reincidencia es el común denominador porque las sanciones llegan tarde o nunca.

"Ellos se llevan el producto muestra, pero no decomisan el lote. Porque no tienen certeza de que haya presencia de contaminantes. Los resultados salen días después, cuando ya el lote no existe. Entonces, justamente, hemos alertado sobre cómo se está haciendo ese procedimiento. Y el procedimiento se tiene que hacer en el campo", dice Luis Castillo.

La Contraloría también encontró que las empresas que venden agroquímicos se burlan fácilmente de la autoridad.

En julio del 2023 el Senasa inmovilizó 23 unidades de un plaguicida prohibido a la empresa Agrocomercializadora Norte Chico. Inexplicablemente, en lugar de incautarlos, los dejó en el local de la compañía. Cuando regresó a hacer una inspección, el dueño había cambiado la razón social y no pudieron entrar. Esta modalidad se ha vuelto un patrón con la anuencia del organismo sanitario. ■

tucional de un presidente. No puede permanecer callado.

La defensa que lideramos con mi maestro Eugenio Zaffaroni no sostiene que no lo pueden vacar a Castillo, solo sostiene una cosa: que si lo quieren hacer (y por supuesto lo pueden hacer), no lo deben hacer de cualquier manera, sino con apego estricto a la ley. Con respecto a las formas y requisitos constitucionales. No pasando por encima de ellos, que es lo que sucedió hasta aquí. No con menos votos del piso mínimo indicado en forma expresa en los reglamentos.

Por eso le hemos propuesto, para el proceso penal, un juicio de ruptura. Porque al ser un presidente mal destituido o mal vacado, no corresponde un proceso penal. El juicio es nulo, como la vacancia. Lo única forma de "reparar" institucionalmente este proceso es evitando que Perú incurra en responsabilidad internacional y garantizando a Castillo un juicio político justo, conforme a Derecho. Con los votos mínimos que manda la ley. No con menos votos. No con 101. Sino con 104. Si no alcanzan los votos mínimos que manda la ley, no pueden (no podían) vacar a un presidente. Esa vacancia, de la que no existe ni siquiera moción formal, carece de validez jurídica. Es

inconstitucional. No es un asunto menor. Y sí debe ser "reparado". No alcanza con reconocerlo "formalmente". Porque el presidente legítimo sigue preso. Y el policía que lo detuvo reconoció en una audiencia que "no sabía" si ya habían "vacado o no" a Castillo cuando lo detuvieron. Una democracia no funciona así. La policía no detiene presidentes. Se parece más bien a un golpe de Estado, como el padecido por Manuel Zelaya en Honduras o el intento contra Lula en Brasil.

Finalmente, una aclaración. La desinformación por momentos es extrema. Difícilmente Zaffaroni pueda solicitar o pretender presentarse como "amicus curiae" en un proceso penal que él mismo cuestiona como no legítimo. Sería ridículo que diga que un tribunal es irregular, arbitrario o inconstitucional, y a la vez queriendo presentarse como "amigo" de ese mismo tribunal. Zaffaroni nunca pretendió ser "amigo del tribunal" que juzga a Betsy Chávez ni a Castillo. Es importante no desinformar más a la ciudadanía.

Los medios hablan de "falsa narrativa". Pero "falsa" es la vacancia con 101 votos. No es legal. El excanciller tiene que volver a leer la Constitución y el reglamento del Congreso de su país.

las víctimas hasta la fecha. Sin embargo, los apus de las comunidades que llegaron esta semana a Lima para intentar ser escuchados trajeron en un papelito, anotados de puño y letra, los nombres de otros 17 niños del pueblo Achuar que han muerto abatidos por la tos ferina. Los más pequeños, Soraya Nani y Brian Hualinga, tenían 2 meses de edad.

Jorge Fachín y Nayash Chirap Uwa son dos apus del pueblo Achuar que llegaron a Lima esta semana en un viaje interminable de más de 1,200 kilómetros. Su misión era que los escuche el gobierno, que se den por enteradas las autoridades de la tragedia que están viviendo los niños de sus comunidades. No fueron recibidos por la jefa de Estado ni por el ministro de Salud. El viceministro de Salud Pública apenas los atendió en el pasadizo del cuarto piso del MINSA.

Nayash Chirap perdió a su nieto de 5 meses hace dos semanas. En medio del duelo llegó a la capital para dar cuenta de esta tragedia que parece no conmover a nadie.

"Vengo desde mi comunidad para hablar en nombre de todos los niños que han fallecido y de los niños que están enfermos", dice Chirap.

"Nosotros alertamos de esa enfermedad desde junio. Tuvimos reuniones, hubo acuerdos, pero no cumplieron con enviar brigadas de vacunación a hacer intervenciones y asistimos", dice Jorge Fachín.

Como advierte el doctor Juan Carlos Celis, infectólogo de Iquitos, no hay plan alguno por parte del Estado, no hay planificación con enfoque intercultural. "No basta con llevar vacunas y afiches en pleno vacante. Hace falta una planificación de 5-10 años y sobre todo presencia del Estado", apunta.

Fachín se dirige a Boluarte: "Nosotros ya estamos acostumbrados al abandono de siempre del Estado y así avanzamos, sin apoyo, solos por nuestra cuenta y no pedimos nada. Sólo ahora estamos pidiendo la intervención del gobierno porque hay una enfermedad que está matando a nuestros niños y es urgente que nos ayuden a salvarlos".

No hay respuesta hasta ahora.

Dylan

La noche del domingo la pasé empacando porque viajaría a Cusco a ver a Dylan, mi perro. Sí, como lo leyó: viajar para ver a un perro.

Yo en verdad pensaba que sería un viaje apacible y tranquilo. Que iba a trabajar, leer y escribir -ja-, mientras el perro dormiría en el sillón, como siempre. Que tendría tiempo para todo, sin presiones, sin tensiones. Solo el perro, mi Word abierto, su pechuga de pollo y yo.

Hoy es jueves. Dylan está echado a mi lado. En un restaurante. No puedo dejarlo solo. No por él, sino por mí.

Hace un año una de las dueñas de Dylan -tiene cuatro dueños, uno por cada pata- se fue a vivir fuera del país. Así, Dylan perdió una de sus dos casas, y yo el cuarto donde me alojaba cuando lo visitaba, y donde dormía con él. Él es un perro renegón, parsimonioso, frío y distante -hasta depresivo-, pero es bastante sensible. Ese último día en el departamento estuvo increíblemente triste, incluso para sus estándares. Olió todas las cajas de la mudanza y luego se tiró en el piso. No quería levantarse. Tampoco comer. Sabía que todos estaban acontecidos. Antes de irme al ae-

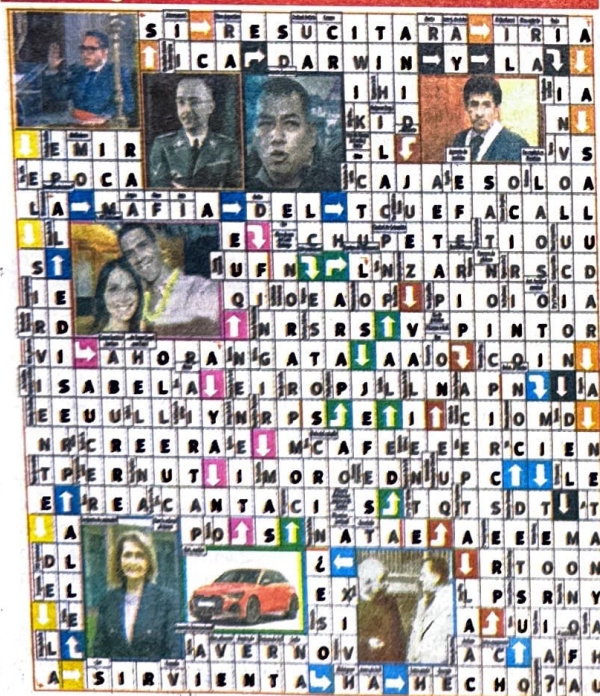
Un ogro que nos esquilma

El necesario cuidado y protección del medioambiente no puede implicar renuncia al progreso ni cortapisa a la prosperidad, particularmente en países plagados de carencias como el nuestro. Por eso, el radicalismo medioambiental, donde el occidente próspero con sus afanes neocoloniales pretende embutirnos, es muy dañino.

Como para los más de 7,000 millones de habitantes que poblamos el planeta los recursos materiales y tecnológicos o son escasos o sofisticados, el petulante ambientalismo radical pretende limitárselos a quienes a duras penas subsisten y así estancarlos en los rudimentarios métodos productivos del pasado, así como en sus obsoletos patrones de consumo. Se trata, pues, de una intolerable injusticia porque tanto bienes como avances deben estar al alcance de todos y porque la inexorable globalización exige eficiencia productiva y castiga los anacronismos.

En el mundo primitivo lo natural era la caza, la pesca y la recolección. Con la agricultura, hace como 10,000 años, el modo de vida sedentario comenzó a reemplazar al del nómada, hasta sustituirlo. Vino luego la domesticación de animales y la selección de cultivos. Surgió el

Pendograma solución anterior N°747





CARLOS LEÓN MOYA

ropuerto, me quedé solo con él. No se echó conmigo en el sillón. Nunca se levantó del piso.

Desde entonces, hace exactamente un año, lo visité solo una vez. ¿Por qué? No lo sé. Pero cuando lo vi todo parecía seguir igual, solo que él estaba un poco más calmado, algo menos ansioso.

Ahora he estado solo con él cuatro días, en un departamento justo al frente en donde él vivía. Según yo, para que él no pierda sus antiguas costumbres: sus parques, sus rutas, sus amigos callejeros. Además, me daba pena que él quisiera siempre entrar a su antigua casa cada vez que pasaba por allí, como si no hubiese aceptado la mudanza.

Es jueves, y ya me di cuenta de que todas esas cosas no eran por Dylan, sino por mí.

Dylan se adapta. Los primeros dos días se sintió medio perdido—dónde estoy, dónde están los demás, por qué hay un perro en el departamento de al lado—, pero ayer miércoles ya se había adaptado totalmente. ¿Cuál fue la señal? Cuando empecé a ver tenis en la sala, Dylan me miró, se paró con aburrimiento, se dio la vuelta y se fue hacia la cama con la misma parsimonia con la que Alejandro Toledo cruzó frente a Mávila Huertas en el debate presidencial: lento, pesado, cabizbajo.



Luego, se metió a un cuarto, se subió a la cama, suspiró, y empezó a dormir. En otras palabras, "tengo una vida propia, quédate ahí no más, me voy a dormir". Era el perro de siempre.

Mientras tanto, yo empezaba a sentirme fuera de lugar. En primer lugar, Dylan no es el perro de siempre. Ya es mayor. Tiene seis años. Ya sé que no es el cachorro que entraba en mis dos manos, pero tampoco es el adolescente bravucón, esbelto y juguetón que era en la pandemia. Ya está más calmado. Se aburre más. Se cansa más. Está más gordo. No aguanta a los perros que quieren jugar con él. Ya no ladra sin cesar cuando quiere espantar a alguien: solo gruñe. Es un adulto. Es como si tuviese 40. Ahora se parece a mí. En cambio, Blacky—mi otro perro—es un cachorro de año y medio

que tiene el mismo comportamiento de Dylan a su edad. Igual de enérgico y juguetón. Hasta tienen el mismo cuerpo. El domingo pensaba que Blacky era un Dylan de otro color. Ahora me doy cuenta de que Blacky es un Dylan, pero del pasado. Mi Dylan ya no es joven.

En segundo lugar, me di cuenta de que no solo el perro había perdido sus costumbres. Yo también. De pronto, supe que yo tampoco tenía un espacio físico. El Airbnb que alquilé estaba bien, pero me era ajeno. Me cuesta días acostumbrarme a los lugares, y recién pude hacerlo hoy (muy tarde: viaje en la noche). Era una casa ajena, y eso me hacía sentir la ciudad un poco ajena (súmele el perro que envejeció). Así, dejar a Dylan en un departamento que no era suyo, ni el mío, fue generándome culpa. Ansiedad. De repente, descubrí que la única forma en que me sentía a gusto era paseándolo. Era matar tres pájaros de un tiro: reconocía a mi perro de vuelta—la calle es lo único que lo alegra—, reconocía la ciudad, y también me alejaba de un departamento que estaba bien pero que no sentía como propio. Así, por fin, pude encontrar la tranquilidad que creía, ilusamente, iba a estar en un sillón.

Dylan es una cosa rara para mí. Es una sensación de hogar, de compañía y de familia. Es el único ser vivo que logra hacerme despertar a las 7 de la mañana. Y verlo mayor me ha hecho pensar también en lo efímero de las mascotas. Ayer era un cachorro, como el Blacky. Ahora es un señor, y empieza a tener las actitudes de viejo que tenía mi Nañita, mi perra que murió en enero. Es el continuo avance de la vida de las mascotas. Y el avance de la mía, también.

Y yo que pensaba que sería un viaje apacible y tranquilo. ■



RAFAEL BELAUNDE AUBRY

aprovechamiento de los metales y sus aleaciones: del cobre al bronce y del bronce al hierro. Desde entonces se desarrolló el comercio, pero nadie podría hoy acceder a la prosperidad aferrándose exclusivamente a esos avances y renunciando a los que sucesivamente nos ha deparado la tecnología.

A fines del siglo XVIII el aprovechamiento sistemático de la energía contenida en el carbón desencadenó la Revolución Industrial, que luego apelaría al consumo de los hidrocarburos.

Aproximadamente un siglo después de iniciada esa revolución, el clérigo anglicano Thomas Malthus postulaba sombríamente que mientras la población humana crecía en progresión geométrica la provisión de alimentos lo hacía sólo en progresión aritmética, lo que derivaría en una feroz competencia por la subsistencia y eventualmente en hambrunas, epidemias y guerras.

Que tales calamidades no se plasmaran se debió a que Malthus no percibió el alcance de la productividad, a pesar de que sus beneficiosos efectos comenzaban ya a aflorar frente a sus narices.

En tiempos modernos el providencial guano de las islas que contrarrestaba el desgaste nutritivo



En el Perú, los transgénicos están prohibidos por instigación de pseudoambientalistas.

de la tierra y que, dicho sea de paso, trajo inusitada prosperidad para algunos privilegiados locales, fue rápidamente sustituido por los fertilizantes sintéticos que, a diferencia de los de origen animal, se obtienen a partir de la química inorgánica.

Más recientemente, la ingeniería genética desencadenó la revolución verde que multiplicó aun más la productividad del campo. Gracias a ella, en Italia, por ejemplo, la producción por hectárea de maíz se incrementó entre 28 y 43%. La India, por su parte, duplicó su producción algodónera en tan solo cinco años (agbioworld.org).

Actualmente, gracias a la utilización de variedades transgénicas, los norteamericanos logran produccio-

nes de papa de 42 toneladas por hectárea, aunque en ciertos Estados como Washington algunos operadores alcanzaron hasta 70. Comparativamente, nuestro promedio anual es de solo 17 toneladas.

Es que acá el acceso a las mejoras enfatiza el capital (economía de escala, riego por goteo, etc.), no los avances para todos. Los transgénicos están prohibidos. La prohibición del uso de semillas mejoradas, promovida por pseudoambientalistas, anticientíficos y antiperuanos, les ha impedido a nuestros agricultores aproximarse a su potencial productivo, condenándolos al estancamiento.

¿Sería verosímil que por prejuicios similares se prohibieran los tajos abiertos en la gran minería, o es que allí la voracidad tributaria del Estado se impone? ¿No son evidentes las razones por las que se discrimina todo emprendimiento popular o emergente? Sí, lo son: no hay mucho que esquilmarles a los pequeños.

Octavio Paz opinaba que el Estado contemporáneo era un amo sin rostro, más temible que los antiguos tiranos y déspotas. ¿No es acaso el nuestro un ogro que esquilda implacablemente a la sociedad y la somete? Sí, lo es y la desangra como si se tratara de una transfusión, ¡pero de las venas de un famélico a las de un robusto!

La llamada República Criolla, con sus argollas, privilegios y prebendas, con sus prevaricaciones, sus extorsiones y sus tutelas, es la más enconada obstruccionista del Perú emergente y lo seguirá siendo hasta que logremos reformarla para hacerla genuinamente representativa, verdaderamente democrática, y transparentemente liberal. Esa venidera República Chola pondrá el progreso, la propiedad y la prosperidad al alcance de todos, no solo de algunos. Entonces, los agricultores, entre otros emprendedores, liberados ya de asfixiantes restricciones, podrán decidir qué sembrar. ■

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desahogo insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIY A. DIZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARRILLAS FOTOGRAFÍA: JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA CORRECCIÓN: MARÍA JIMÉNEZ PENDEGRAMA: LAURA YEPEZ ESPEJO
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT COORDINACIÓN: ALEXANDRA AMPOERO COLABORADORES: JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NUÑEZ CARVALLO, RODOLFO
SÁNCHEZ-AZCORBE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL REDACCIÓN: JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES
TELÉF: (01) 693-1082 CONTACTOS: denuncias@hildebrandtensustrecre.com - prensa@hildebrandtensustrecre.com - www.facebook.com / semanariohildebrandtensustrecre
TWITTER: @ensustrecre - IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA - HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ - Nº 2010-05328 EDITADO EN LIMA SEPTIEMBRE 2025